

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

Política de reubicación poblacional y el ordenamiento socioeconómico en el proyecto
habitacional La Mena, Distrito Metropolitano de Quito, entre los años 2011-2015

TUTORA: NATALIA SIERRA

Mateo Reascos

INTRODUCCIÓN

El tema central del presente trabajo radica en el ordenamiento territorial del espacio urbano, particularmente de la ciudad de Quito. Utilizando como caso concreto de estudio al proyecto habitacional “La Mena” que está caracterizado principalmente por ser un proyecto de relocalización masivo que reunió a los habitantes de diversas zonas urbanas en un mismo barrio. El analizar este caso en particular permitirá dar cuenta del complicado entramado que define la construcción social del espacio incluyendo variables políticas, económicas y sociales.

De esta manera, se explorará las diferentes implicaciones que tiene dichas variables en la construcción y funcionamiento del nuevo complejo habitacional. Por lo tanto, el objetivo principal del trabajo es plantear la relación entre la política pública y la configuración de la interacción social contenida por el uso y organización del espacio para la reproducción de la vida individual y colectiva. Para conseguirlo se investigarán los cuatro ámbitos que componen el fenómeno desde la perspectiva de dicha relación entre la política pública y la configuración del uso del espacio social.

El primero es determinar cuál es el vínculo entre las poblaciones desplazadas y la administración pública. El segundo es identificar los nexos que hay entre la actividad de construcción y la actividad financiera. El tercero es identificar las diferentes actividades políticas, sociales, geográficas y ambientales que definen la operatividad del espacio de La Mena. Y el cuarto es mapear las diferentes actividades políticas, sociales, geográficas y ambientales que definen la operatividad del espacio de las zonas de riesgo de deslave en la ciudad.

Este trabajo, desde el campo de la sociología urbana, es de gran interés académico y cuenta con diversos enfoques de aproximación, así como también de constantes estudios y producción de categorías. Por esta razón, el estudiar el proceso urbano de los desplazamientos poblacionales llevados a cabo por la administración pública entra sin intermediaciones en el campo del conocimiento de la sociología urbana. Paralelamente, la sociología política es un campo que completa la investigación de procesos urbanos, particularmente cuando las políticas públicas están en juego como en este caso.

Adicionalmente, a investigación responde directamente a intereses sociales muy concretos relacionados con la territorialidad y el acceso a un hábitat adecuado para la reproducción de la vida. Recordando también todo el tema de la prevención de riesgos y desastres vitales para garantizar un mínimo de seguridad a las poblaciones. La investigación sobre la re-ubicación se centra en poblaciones de escasos recursos y que estuvieron en grave peligro de ser afectados por desastres naturales; por lo tanto, el interés social por entender estos procesos urbanos y políticos es inminente.

Partiremos de un primer supuesto o hipótesis que puede resumirse en el establecimiento de que hay una relación de subordinación de la política de reubicación al ordenamiento socioeconómico diseñado desde intereses particulares inmersos en la administración pública; el Estado intenta reconquistar la territorialidad de la ciudad y diseñar una forma de ciudadanía. En otras palabras, el espacio social y el ordenamiento territorial están determinados por las políticas estatales o municipales, así como también de los movimientos económicos y la circulación de capital que estos presuponen. Al mismo tiempo que dicha determinación se plasma en la forma de interacción social que los habitantes mantienen entre sí, con el resto de la ciudad y sobre todo con las formas de reproducción de la vida.

Hablamos de un fenómeno que implica a una población concreta que ha cambiado la lógica de su distribución del espacio y su relación con el proceso urbano en general. Un cambio tan significativo que va a ser la fuerza gravitante sobre la cual se determinen tanto las dificultades actuales en la convivencia de los habitantes y su relación con la administración pública.

Es una transformación en la distribución espacial que sujetará la forma cómo se expresan las relaciones de poder, económicas y culturales dentro de un nuevo ensayo de organización social: La relocalización masiva de habitantes de zonas de riesgo a un solo espacio que concentra recursos y reconfigura la forma de interactuar de todos quienes la conforman. De manera sencilla es el paso de un espacio semi-urbano amplio que guarda las formas de socialización rurales hacia un espacio urbano mucho más reducido que pone a prueba las formas de socialización anteriores, siendo fuente de nuevas oportunidades y una clara nueva distribución de recursos.

El método que se utilizará para llevar a cabo la investigación en los diferentes ámbitos es de naturaleza cualitativa al tratarse de un esfuerzo de análisis interpretativo de un fenómeno en concreto. Para levantar la información, se dará prioridad a los sentidos que los propios actores sociales entregan a sus propias acciones e historias de vida. Se tomará en cuenta tanto a los propios habitantes del proyecto habitacional “La Mena” como también los actores de la administración pública que interactuaron directamente con todo el proceso de respuesta frente al riesgo, relocalización, manejo de trámites y seguimiento de los requisitos económicos. Lo mismo sucede para el caso de procesar la información sobre las políticas públicas y los movimientos económicos, dando énfasis a comprender su significado concreto en el caso del proyecto habitacional.

Las estrategias de investigación incluyen entrevistas semiestructuradas a los habitantes, sus líderes barriales y al personal de atención pública. La revisión y examinación de los documentos oficiales con las disposiciones políticas o las normativas generadas para poner en marcha al proyecto. Y una exploración histórica del contexto geográfico, político y económico de la ciudad en general que permita dar un marco de referencia y pertenencia al proyecto habitacional.

También se elaborará un diario de campo para dar cuenta de las apreciaciones generales sobre la vida cotidiana el barrio de La Mena y en especial para reunir la información sobre la interacción directa que tuvieron los habitantes del barrio con los servidores públicos encargados del seguimiento de convivencia en el barrio y control de cumplimiento de requisitos legales o económicos.

En cuanto a la organización de contenidos de cada uno de los capítulos se puede describir de la siguiente manera: El primer capítulo, construcción social del espacio y ordenamiento socioeconómico, se hará una revisión conceptual y epistemológica sobre cómo se abordará el tema. Este capítulo explica las herramientas conceptuales que se utilizaran para el análisis y la interpretación de la información recopilada. Esta primera parte de todo el trabajo es una discusión teórica que maneja sobre todo información bibliográfica. Se cubrirá las nociones fundamentales del espacio social y del manejo territorial. Los conceptos básicos y la postura

general sobre qué es una ciudad y cómo funciona su proceso de construcción. También se trabajará sobre los desplazamientos sociales forzados por desastres naturales y finalmente la distribución geográfica de la ciudad que marca su proceso de construcción.

Para el segundo capítulo, se abordará directamente el caso concreto del proyecto habitacional de “La Mena”. Iniciando con una revisión del contexto histórico de la ciudad de Quito que define al proyecto habitacional, se revisará la progresión de la configuración geográfica y política de la ciudad y cómo esta determina, en cada etapa histórica, las condiciones que nos permiten explicar y entender los procesos actuales. Luego se hará una descripción exhaustiva de todo el proceso que dio lugar al conjunto habitacional en el presente, incluyendo acciones políticas, financiamiento, selección de habitantes, etc. Finalmente, se exhibirán los resultados obtenidos de la investigación directa sobre el fenómeno, tanto de las entrevistas como del diario de campo.

Para el tercero y último capítulo se realizará un emparejamiento de los conceptos expuestos en el primer capítulo con la información detallada en el segundo, con el propósito de hacer un análisis y realizar una interpretación sobre: Cuál es la relación entre la política pública y el ordenamiento socioeconómico del espacio. Explorando y analizando cada uno de los puntos de interacción que dan cuenta de dicho objetivo general. Iniciando por lo más general, el proceso urbano de toda la ciudad y la forma cómo este afecta al barrio de la Mena. Pasando por la conexión entre las políticas de reasentamiento y el desplazamiento de población. Para terminar con la revisión de la hipótesis planteada y la exploración de la forma de convivencia dentro del barrio de La Mena.

ABSTRACT

Este trabajo se enmarca dentro del estudio de los procesos urbanos desde una perspectiva sociológica y en atención a los movimientos económicos y políticos que la definen. La investigación se enfoca en el caso del proyecto habitacional “La Mena” de la ciudad de Quito que inicia como parte de una respuesta desde la administración pública de la ciudad a la situación de inminente riesgo que presentaban los habitantes de zonas de riesgo de deslave en los sectores periféricos de la ciudad. Se analiza entonces el proceso de relocalización y de

ocupación del nuevo barrio junto con todas sus implicaciones sociales, económicas y políticas. A grandes rasgos, los resultados que se construyen al término del proceso de investigación giran en torno a cómo el movimiento de capitales desde el sector público genera una configuración en el territorio basada en la constante interacción entre habitantes y administración pública. También un manejo sobre el riesgo y la ecología desde el punto de vista del crecimiento urbano que se materializa en relaciones interpersonales concretas entre los habitantes que pasan de un estilo de vida orientado a un espacio semi-urbano a un espacio urbanizado por completo y con constante intervención y supervisión de la política pública. Evidenciando el proceso de urbanización no solo en la geografía como tal sino en las lógicas de convivencia y uso de dicha geografía por parte de sus habitantes. Así, encontramos que las dificultades operativas: de acceso a recursos, el tener un espacio libre de riesgo, bienestar material fueron relativamente superadas al tiempo de generar nuevas problemáticas en cuanto a: convivencia entre vecinos, relación ecológica con el medio ambiente y seguridad frente a riesgos urbanos como robos o tráfico de drogas. Resultando en una situación única en que, luego de cuatro años de iniciado el proceso, se encuentran toda clase de manifestaciones de esta relación de tensión entre la política pública y la vida social o cotidiana de los habitantes de este barrio en específico. Realizando lo complejo que resulta en la práctica el llevar a cabo los procesos de urbanización, entendiendo como una organización del espacio que conlleva la adecuación de las lógicas de interacción social. Siendo un proceso adaptación constante para los habitantes de La Mena y de superación de una serie de dificultades.

Descriptor: Geografía Social, Urbanidad, Política Pública, Relocalización, Gestión de Riesgo, Convivencia, Quito, Proyecto La Mena

CAPÍTULO I
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO, ORDENAMIENTO
SOCIOECONÓMICO

1.1. PROBLEMATIZACIÓN Y ENFOQUE DE ESTUDIO

Para el presente trabajo se realizará un análisis del Proyecto Habitacional “La Mena” de Quito, ubicado al sur de la ciudad. Se utilizará el enfoque que ve a la ciudad como un espacio urbano en movimiento; el mismo que es a fin de cuentas un fenómeno mundial caracterizado por entablar relaciones urbano-rurales estableciendo predominancia al eje urbano. Respondiendo a procesos de modernización típicamente acompañado por estallidos económicos pertenecientes al sistema mundial. Es decir, se gesta en un marco de globalización y capitalismo interconectados entre sí.

El proceso urbano modifica la noción de espacio y ubicación en relación con la escala mundial. Accesos para la tecnología de comunicación y de trabajo. Traducidos en enlaces de diversas realidades a nivel mundial, configurando las magnitudes de cercanía y alejamiento de los segmentos del territorio. Teniendo en cuenta que la ecología recae directamente sobre dichos procesos dado que ella nos da cuenta de la relación de los seres humanos con el medio ambiente. Y con mayor precisión aun, sabemos que la ciudad y el Proyecto Habitacional “La Mena” son temas de importancia ecológica en la medida que representan la construcción dialéctica entre espacio “artificial” o medio social con el medio ambiente o espacio “natural objetivo”.

La ciudad se construye en la medida que los procesos urbanos van siendo efectivos. Estos procesos no son de ninguna manera autónomos ni impersonales; se construye en base a las personas que la habitan y llenan de vida. Hay que tener presente en todo momento la noción de dinámica para entender cómo la configuración del territorio es un proceso que funciona como núcleo movilizador de la ciudad.

Las personas que habitan los procesos urbanos, producen las interacciones que hacen que la ciudad sea un fenómeno en movimiento. En este punto podemos mencionar el debate que existe sobre dos grandes corrientes que se dedican a entender a la ciudad: en primer lugar, tenemos aquellos estudios que forman una explosión, una constelación de temáticas específicas.

Desde este enfoque se comprende el funcionamiento de sectores cuya razón de existencia se encuentra relacionada o hasta justificada por la ciudad. Y en segundo lugar tenemos a la reflexión de procesos urbanos centrales; los cuales realizan una comprensión de la lógica de la ciudad como fenómeno entero. Su principal referente de estudio es el movimiento de la ciudad.

Diremos entonces que el Proyecto Habitacional “La Mena” constituye un fenómeno urbano entero que si bien no se enfoca en la ciudad en el nivel más macro; necesariamente da cuenta de este. Partimos por determinar que no podríamos entender el proceso urbano de la Mena sin antes comprender el proceso general que lleva a Quito junto con aquellas dimensiones que son correlacionadas con los fenómenos de globalización y de modernización.

No veremos al Proyecto habitacional como una temática específica y autónoma sino como una muestra o un extracto de aquel movimiento total de la ciudad. Pensemos que, dentro de una ciudad con diversas realidades territoriales, los barrios son como la unidad más pequeña que puede mostrarnos o que puede implicar en ella los diferentes fenómenos nucleares que constituyen la ciudad. Para aclararnos en este asunto podemos citar a Sassen:

“Lo que se debe aclarar es que ahora no se puede concebir a las ciudades como unidades cerradas, sino como estructuras complejas en donde se articulan varios procesos transfronterizos y participan tendencias importantes” (Sassen, 2007, pág. 126).

Articularemos al capitalismo como dimensión trascendental de cada proceso urbano incluyendo al Proyecto Habitacional “La Mena”. El capital funciona como un núcleo reactivo, como un energizante que diseña, promueve, transforma y sostiene la ciudad en la modernidad. Dicho esto, podemos afinar este punto de análisis sobre los procesos urbanos: hablamos de capitalismo como influenciador primario de muchas de las lógicas urbanas; entonces podemos decir que nos referimos a los diversos flujos de capitales que se asientan. Así, responderemos a las preguntas de ¿cómo los flujos del capital estructuran el proceso urbano? y ¿cómo los flujos del capital determinan las características geográficas de las zonas urbanas?

“Una cuidadosa revisión sobre los trabajos de Marx revela que él reconocía que los procesos de acumulación del capital tenían lugar en un contexto geográfico y que mientras ese proceso de acumulación estuviese allí, podría volcarse a favor de crear tipos específicos de estructuras geográficas.” (Harvey, 2001, pág. 237)

La acumulación del capital tiene una dimensión e impacto territorial relacionado con una determinada organización socio-económica del territorio. Hablamos de la acumulación del capital: son puntos de circulación de capitales que poco a poco modelan la geografía siempre pensando en la acumulación del capital.

La forma cómo el espacio es tomado por los diferentes grupos humanos constituye un ingrediente vital para la reproducción de la vida. En este punto se establecen las relaciones específicas entre la sociedad y su entorno que se entiende como un gran abanico de recursos. Por lo cual podemos establecer que, al armar un asentamiento, los grupos humanos definen su esquema ecológico y su sentido particular respecto al conflicto cultura-naturaleza. Y de forma subsecuente se conecta la política para lograr organización espacial usando el camino de la disputa entre los integrantes del grupo.

No es casual que cuando hablamos de política, es muy corriente implicar la variable del territorio como dimensión complementaria. Lo que sucede es que, al momento de tomar un espacio, automáticamente se proyecta sobre él aquel campo de conflicto que define la política. Hablamos de una objetivación que forja el territorio, empezando por delimitarlo y llegando hasta tipificarlo diferencialmente. Sin un espacio susceptible de ser tomado o apropiado, la materialización de la cultura y de la política sería absolutamente imposible. Dicho de otra manera, en la forma cómo el espacio es tomado se juegan las bases para construir el mundo material y simbólico de un grupo humano.

La lógica de la urbanización se encuentra plasmada en cómo los grupos sociales hacen uso del territorio en conjugación con las fuerzas políticas y económicas que lo moldean constantemente. Evidenciándose en el ejercicio de la construcción de mundo sobre la base de un entorno aprehendido y susceptible de ser tipificado para consolidar una lógica de distribución del mismo y sus recursos. En todo caso, podríamos decir cada vez que se produce un asentamiento de uno o varios grupos humanos, se implica la fundación de un pueblo, de un ensayo particular. Y en el caso de un re-asentamiento o de que un grupo se desplace por fuera de su territorio habitual, pues conllevará consigo una re-fundación que podrá ser una alternativa diferente o tal vez una reafirmación de la original.

Ahora bien, establecida la relevancia que tiene el proceso de armar un asentamiento humano, es importante establecer cuáles son las particularidades del fenómeno que se busca conocer en esta investigación. Así, al hablar del proyecto municipal “La Mena” ejecutado entre el 2011-2015, conectamos con un fenómeno de reubicación territorial de diversos asentamientos humanos dispersados en zonas de riesgo por todo el distrito metropolitano de Quito. Generando un gran conjunto habitacional general que conglomerará a todos aquellos asentamientos una vez dispersados y ahora centralizados en un área segura para la urbanización.

La acción estatal es la encargada de producir todos los cimientos necesarios para que se produzca el fenómeno del reasentamiento y por lo tanto aquella acción de fundación o de re-fundación. No obstante, la constante interacción de los propios grupos reubicados es significativa e interactúa mucho con el aparato estatal logrando tener influencia sobre ciertos aspectos de su accionar.

Por esta razón podemos establecer que se trata de la puesta en marcha de un conflicto medioambiental que incluiría un grupo de ingredientes clave que lo caracterizan: En primer lugar tenemos la presencia de los llamados asentamientos irregulares que responde a variables de migración urbana o rural; en segundo lugar estaría el complejo de gestión del riesgo emblemático de la administración pública; y en tercer lugar tenemos a la reubicación humana desde lo estatal en su forma más generalizada, la misma que incluye cualquier tipo de ordenamiento del territorio, no solamente los sistemas de vivienda.

Ahora bien, establecida la relevancia que tiene el proceso de armar un asentamiento humano, es importante establecer cuáles son las particularidades del fenómeno que se busca conocer en esta investigación. Así, al hablar del proyecto municipal “La Mena” ejecutado entre el 2011-2015, conectamos con un fenómeno de reubicación territorial de diversos asentamientos humanos dispersados en zonas de riesgo por todo el distrito metropolitano de Quito. Generando un gran conjunto habitacional general que conglomerará a todos aquellos asentamientos una vez dispersados y ahora centralizados en un área segura para la urbanización.

La acción estatal es la encargada de producir todos los cimientos necesarios para que se produzca el fenómeno del reasentamiento y por lo tanto aquella acción de fundación o de re-fundación. No obstante, la constante interacción de los propios grupos reubicados es significativa e interactúa mucho con el aparato estatal logrando tener influencia sobre ciertos aspectos de su accionar.

Por esta razón podemos establecer que se trata de la puesta en marcha de un conflicto medioambiental que incluiría un grupo de ingredientes clave que lo caracterizan: En primer lugar tenemos la presencia de los llamados asentamientos irregulares que responde a variables de migración urbana o rural; en segundo lugar estaría el complejo de gestión del riesgo emblemático de la administración pública; y en tercer lugar tenemos a la reubicación humana desde lo estatal en su forma más generalizada, la misma que incluye cualquier tipo de ordenamiento del territorio, no solamente los sistemas de vivienda.

1.2. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES GENERALES

El núcleo conceptual de esta investigación radica en la pregunta de “¿Qué es el espacio?” dado que lo que se trata de hacer en última instancia es comprender un fenómeno de modificación territorial. Por lo tanto, manejar una definición o una noción precisa sobre el espacio resulta indispensable para lograr dicho objetivo.

De esta forma, en primer lugar, podríamos abordar al espacio como una realidad *en sí misma* u ontológicamente contenedora de las relaciones sociales. Sin embargo, esta aproximación anularía inmediatamente la pregunta inicial y en consecuencia no nos permitiría indagar sobre el fenómeno de reubicación poblacional o modificación territorial más allá de un simple mapeo geométrico o meramente geográfico que no considere factores de interrelación social.

Si queremos realizar un estudio sociológico sobre el tema debemos considerar una definición relacional del espacio; es decir, como un objeto que solo es entendible desde las conexiones con otros objetos dados y que dichas conexiones afecten directamente su definición. Por lo cual la pregunta sobre ¿Qué es el espacio? carece de sentido y de operatividad, por lo que sustituimos dicha pregunta por una nueva: ¿A qué se debe el hecho de

que las prácticas humanas diferentes creen y utilicen distintas conceptualizaciones del espacio?
(David, 1979)

“Si queremos comprender la forma espacial de las ciudades, hemos de articular una adecuada filosofía del espacio social. En la medida en que solo podemos comprender el espacio social relacionándolo con ciertas actividades sociales, nos vemos obligados a tratar de integrar las imaginaciones sociológicas y geográficas.” (David, 1979, pág. 21)

Así, nuestra conceptualización nuclear para esta investigación ve al espacio no como *en sí mismo*, ni absoluto, ni relativo, ni relacional, sino como un objeto que puede llegar a ser una de estas cosas o todas a la vez según las circunstancias. De esta forma, colocaremos la definición del espacio en las actividades humanas que lo modelan, que lo interpretan y que le dan sentidos o usos. Entonces, nos interesa la construcción social del espacio y el uso práctico que los humanos hacen de este en la medida como materializan en él sus diferentes relaciones.

Ahora bien, el siguiente punto conceptual básico para el estudio es la construcción de la ciudad, sobre todo aquella que tiene que ver con la administración gubernamental y las políticas territoriales en general. No obstante, contar con una categorización general sobre el urbanismo resulta igual de indispensable debido a que esto determinará el tipo de abordaje que realizaremos.

De igual forma que para el espacio, una definición relacional sobre el urbanismo aporta con elementos más claros en la comprensión sociológica. Y en el caso de cómo se construye una ciudad, este enfoque resulta especialmente pertinente debido a que típicamente consideramos que las ciudades son la suma de múltiples fenómenos de órdenes extremadamente diversos. Lo que produce que las preocupaciones por el fenómeno ciudad se transformen en una preocupación por todas las facetas del hombre, la sociedad, la naturaleza, el pensamiento, la ideología, la producción, etc. Todas constituidas alrededor de una definición relacional. (David, 1979)

La opción que tomaremos será ver al urbanismo y al espacio urbano como un objeto que nos proporciona un lazo de unión entre problemas importantes, pero aparentemente dispares. Concepción que se deriva del hecho de considerar a la ocupación social como aquello que

determina qué es y cómo opera el espacio. La ciudad es aquel espacio donde se pueden encontrar una masiva y diversa ocupación social del espacio que nos vincula a cada uno.

Una vez establecidos los criterios básicos de la investigación, solo nos quedan los conceptos que especifiquen completamente nuestra construcción teórica del fenómeno. El primero sería el papel que tiene la política en los fenómenos de modificación territorial y para ello nos apoyaremos en el concepto de construcción poli-céntrica de la ciudad y en el concepto de la urbanización de lo urbano. El segundo sería la dimensión del ordenamiento socioeconómico de la ciudad para la cual utilizaremos la conceptualización de que el espacio de los flujos supera al de los lugares.

La construcción poli-céntrica de la ciudad se refiere a una nueva tendencia en la planificación urbana que busca recuperar su vértice ordenador de la ciudad en la medida que genera múltiples órdenes dentro de la misma en lugar de un solo orden homogeneizador. Por lo tanto, la planificación pasa a ser estratégica en lugar de física o geométrica; lo que significa que la planificación-gobierno guíe la gestión urbana desde una perspectiva de largo plazo en lugar de teleológica. (Carrión, 2001)

Por otro lado, la urbanización de lo urbano se refiere a un concepto que explica las diferentes alternativas de llevar a cabo el desarrollo urbano utilizando como parámetro la orientación espacial de dicho desarrollo. Cuando se dice que se realiza un proceso de urbanización de lo urbano, se está refiriendo a una urbanización sobre un territorio ya configurado en lugar de un espacio vacío o un plano en blanco. Es el proceso de re-construir o de modificar el espacio ya establecido caracterizado por ser endógeno y centrípeto al contrario de la forma tradicional de desarrollo exógeno y centrífugo. (Carrión, 2001)

Finalmente, en lo que se refiere al ordenamiento socioeconómico del espacio urbano, utilizaremos la conceptualización del suelo urbano como un aspecto poco significativo en el contexto actual. Es decir, manejamos la idea de que las coordenadas, que definen la relación y la ubicación de los distintitos lugares en un espacio, están determinadas por los flujos existentes dentro de dicho espacio. Así, las variables como distancia o localización pierden relevancia en el ordenamiento socioeconómico. Por lo tanto, en esta investigación utilizaremos

dicho principio como medida fundamental para determinar las posiciones socioeconómicas; no dónde están con respecto a otro elemento, sino a cuántos y qué tipos de flujos urbanos son los que lo definen. (Castels, 1998)

1.3. RELOCALIZACIÓN Y DESASTRES NATURALES

Para comprender de la mejor manera el fenómeno que se va a investigar, es preciso considerar una manera de explicarnos cómo funciona la relación con la naturaleza en el contexto de la construcción del espacio urbano. A simple vista podríamos plantear una relación de oposición, inclusive geográficamente evidente, como lo es el avance o expansión de una ciudad sobre el suelo, empujando la naturaleza.

En este caso, parece que literalmente la ciudad desplaza a la naturaleza. Sin embargo, la situación es más compleja y lo podemos ver fácilmente en las zonas periféricas de las grandes urbes que se encuentran en un punto medio, no completamente inmersas en la ciudad y su infraestructura típica, pero tampoco insertados en pleno campo rural. A medida que la ciudad crece, transforma a la naturaleza, pero no la reemplaza y esta perspectiva es particularmente útil cuando tratamos de dar una explicación a la organización o distribución del espacio social.

Veremos, desde una perspectiva ecológica, a la ciudad como:

“Un sistema gigantesco de recursos, la mayoría de los cuales han sido contruidos por el hombre. Es también un sistema de recursos localizado territorialmente en el sentido de que la mayoría de los recursos que podemos utilizar en un sistema urbano no se encuentran en todas partes y, por consiguiente, su disponibilidad depende de la accesibilidad y proximidad. Así, pues. El sistema urbano contiene una distribución geográfica de recursos creados de una gran importancia económica, social, psicológica y simbólica.” (David, 1979, pág. 67)

Si consideramos a la ciudad como un sistema de recursos, su expansión hacia las áreas rurales es una nueva codificación de la organización de los recursos y particularmente la multiplicación de aquellos creados por el ser humano en particular. La distribución de espacios es lo que marca la relación de la urbanidad con la naturaleza, la forma cómo se administra los recursos y su accesibilidad. Entendemos entonces que, el crecimiento urbano que va a marcar el fondo concreto de la presente investigación está inscrito en la asignación social, política o

económica que se dé a los suelos. Incluso si dicha asignación se refiere precisamente restringir la expansión del suelo urbanizado.

En el caso de la presente investigación es un tema fundamental dado que estamos hablando de un proyecto cuya primera fase fue identificar las zonas de riesgo de deslizamientos en la ciudad y posteriormente relocalizar a las personas que se habían asentado en dichas zonas. Pero en este caso podemos incluir una nueva posibilidad para la reflexión conceptual, y es la iniciativa humana que lleva a extender el suelo urbano que puede manifestarse simplemente como la migración. Las zonas periféricas de una ciudad que son consideradas de alto riesgo comúnmente han sido pobladas por sectores de la población de baja renta o por lo menos de difícil acceso a los recursos del suelo (Hardoy, 1980). Tal es el caso de la quebrada que están presentes en la ciudad de Quito y que son las áreas más susceptibles a ser catalogadas como de riesgo.

Es posible plantear que la expansión urbana hacia las áreas de peligro medioambiental, tanto para los ecosistemas naturales como para las personas, responde a una lógica de multiplicación de las estrategias de construcción y apropiación del suelo. Junto con la afirmación de discrepancias importantes entre los diferentes sectores sociales; y por consiguiente una discrepancia en los modelos o estrategias que determinan la organización territorial y la disposición del suelo en relación con la naturaleza. Según como se explicará a continuación por Hardoy en sus ensayos sobre la construcción de las ciudades en América Latina:

“A medida que los modelos urbanos se hacían más complejos, por efectos del crecimiento de la población, del aumento de la superficie directa indirectamente afectada por la urbanización y por la mayor concentración de funciones en superficies reducidas del territorio, fue evidente que las distinciones entre los sectores perdieron gradualmente las nítidas diferencias de las etapas iniciales y fue necesario pensar en gradientes para cada sector. En otras palabras, los cambios en los usos del suelo y en la estructura social de cada sector fueron reemplazados por usos discrepantes y por una considerable heterogeneidad, al punto que el modelo en sectores y zonas puede ser puesto en duda.” (Hardoy, 1980, pág. 123)

Son justamente: el gradual crecimiento en las diferencias, junto con problemas de desigualdad social y de distribución equitativa del suelo, y los movimientos migratorios (que

tienen de trasfondo acciones económicas y políticas a mayor escala) que generan el crecimiento irregular de la distribución territorial de una ciudad. En atención a esta última proposición, el crear asentamientos en zonas de riesgo constituye una de aquellas estrategias heterogenias que entra en contradicción con otros modelos (el de la administración pública, por ejemplo) que pone de manifiesto una manera concreta de asignar valores de uso social del suelo particulares a su situación en específico. El asignar dichos valores se traduce entonces en crear una sistematización de los recursos y por lo tanto en una forma muy singular de relacionarse con el entorno natural o ecológico al tiempo de hacer uso del mismo.

Los asentamientos periféricos tienden a ser relativamente rurales e implican un proceso de ruralización para la ciudad, sobre todo en aquellos que son directamente producto de las migraciones campo-ciudad, muy comunes en el proceso urbano de Latinoamérica en general (Hardoy, 1980). Al decir que se produce una ruralización, se está indicando que una de las tantas maneras de organizar el sistema de recursos de la ciudad está respondiendo a lógicas de la vida en el campo, pero ubicadas geográficamente en una gran proximidad a la ciudad o en muchos casos en locaciones con características muy difíciles o riesgosas para la construcción que han sido esquivadas y envueltas por el crecimiento urbano. (Por ejemplo, las quebradas o laderas).

Siguiendo con el mismo razonamiento, entenderíamos a la acción de la política pública o de las administraciones municipales como un esfuerzo generalizado por administrar o encaminar el sistema de recursos mediante la participación de su propio modelo de uso del suelo. Más aún cuando se toman medidas para contrarrestar el modelo que ha incursionado en zonas catalogadas como de riesgo. Tenemos entonces al final una disputa ecológica sobre el uso del suelo y la disposición de la seguridad frente a eventos naturales.

Debido a esta última proposición, se considera muy importante el incluir la variable ecológica dentro de las consideraciones conceptuales. Ya que si enlazamos problemáticas de desastres naturales con la decisión de la administración sobre los recursos naturales o artificiales se tiene una situación que debe constantemente buscar un mínimo de equilibrio entre la geografía física y el modelo de urbanización que se requiera tomar.

A continuación, se expondrán los planteamientos básicos que nos permiten enlazar la dimensión ecológica, entendida desde un punto de análisis político y sociológico:

La ecología es un área de entendimiento que da cuenta y examina la relación entre ser humano y su entorno. Así, cuando decimos ser humano no cubrimos solamente su biología o su rol en un ecosistema; en realidad, lo más importante a lo que nos referimos es el ser humano como ensayo de vida, como sentido simbólico o capacidad de producir representaciones. Recordando siempre que resulta imposible separar la dimensión simbólica de la empírica. Al mencionar el ensayo de vida acentuado en la producción de representaciones (ideología) incluimos la materialización de dicha esfera. Como resultado tenemos una ecología entendida desde el intercambio de movimientos y transformaciones humanas con su entorno ideológicamente percibido por igual.

Si nuestro interés es una relación de intercambio, lo siguiente es establecer los límites y condiciones de dicha relación. En el caso del ejercicio de vida del ser humano frente a su entorno tenemos un vínculo basado en el conflicto. Nos situamos en la dialéctica entre sociedad o civilización junto con la naturaleza cuyas existencias representan negaciones estructurales respectivamente. Son más que opuestos, son anti-existenciales entre sí. No obstante, la clave de esta relación aparece cuando reconocemos que al mismo tiempo una parte no se entiende sin la otra. Es la tensión entre civilización y naturaleza lo que hace posible que podamos definir las, reconocerlas y sobre todo habilita un espacio desde donde los seres humanos pueden llevar a cabo su vida.

El conflicto se evidenciará en primer lugar en el cuerpo humano, siendo este la materialización más certera de una relación dialéctica entre sociedad y naturaleza. El cuerpo es al mismo tiempo un producto simbólico socialmente construido con sus respectivas objetivaciones, y también pertenece a las lógicas de la naturaleza, de flujo causal continuo lleno de estructuras biológicas bien diferenciadas de las estructuras sociales. El cuerpo es humano siempre y cuando éste represente un espacio de disputa u colisión de fuerzas.

Sobre el núcleo duro de la dialéctica del cuerpo encontramos todas las ramificaciones de la relación del ser humano con su entorno (en parte porque el primer entorno sobre el cual debe

desenvolverse un ser humano es su propio cuerpo). Sin embargo, por muy diversas que estas ramificaciones puedan ser, las podemos agrupar bajo un término común: la técnica, entendida como la acción de manipular el medio ambiente según las necesidades-intereses que existan en el proyecto de vida.

La manipulación del medio ambiente supone la capacidad de intervenir y transformar el hábitat de forma “consciente”; es decir fundiendo el sentido simbólico-ideológico con las manifestaciones del flujo natural. ¿Cómo fundirlo? En sentido estricto la estrategia es la misma de la categoría *praxis* desarrollada por Marx que consiste en la dialéctica del crear o transformar con el entender o explicar. La forma cómo logramos situarnos en el mundo pasa por una comprensión-acción de los acontecimientos; la única forma de lograr dar cuenta de una existencia es al modificarla de alguna manera su “naturaleza” y volverla operante dentro de nuestro hábitat. El resultado a breves rasgos es la detención, el frenar varias de las expresiones del flujo natural (no el flujo en su totalidad ya que el movimiento es necesario para seguir cubriendo necesidades-intereses) o mejor dicho sería el lograr controlar las causas y los efectos.

“El uso exosomático de la energía y materiales por parte de los humanos depende de la tecnología, la economía, la cultura y la política. La demografía también está relacionada con las estructuras y percepciones sociales cambiantes, y es un sistema reflexivo, en tanto que los patrones de migración humana dependen de la economía, la política, las leyes y la policía de fronteras, más que de imperativos naturales.”
(Martínez, 2004, pág. 51)

¿Dónde podemos evidenciar los mecanismos o las técnicas para la intervención o transformación del entorno? No hace falta imaginarnos máquinas sofisticadas o poderosas, la respuesta es mucho más simple: el lenguaje (haciendo hincapié en su dimensión de representación y simbolización). La técnica más efectiva es el nombrar la realidad y luego establecer un sistema de concordancia para dichos nombramientos. Para utilizar un ejemplo más relacionado con la temática central de la investigación, el hecho de catalogar y *nombrar* los diferentes suelos para constituirlos como espacios seguros o inseguros. O bien, determinar qué ecosistemas deben ser cuidados o protegidos. En este caso resulta evidente que se está utilizando un enfoque completamente ideológico y político.

Cuando se nombra y luego se “rellena” o se define aquel nombre se está realizando activamente una técnica para manipular el medio ambiente y sobre todo nos indica el proceso más básico que nos permite entender la fundición dialéctica entre la ideología y la percepción y uso ideológico de la naturaleza.

Sabemos que el lenguaje es un rasgo constitutivo de la humanidad. No obstante, al ser una técnica varía mucho de acuerdo a las sociedades que existen, un lenguaje está vivo y logra construir el medio ambiente en la medida que este último construye al lenguaje. Las palabras funcionan como organismos vivos en todo el sentido de flujo y de adaptabilidad. Algunas palabras se extinguen en razón de que su sentido y su lugar en el mundo son perdidos, otras palabras nuevas aparecen cuando hay un lugar en el mundo que requiere un sentido y una aproximación. Así como continuamente la tecnología va innovando y trasformando la realidad inmediata y a largo plazo del ser humano, el lenguaje hace exactamente la misma cosa (al menos en su dimensión de técnica social).

Por otro lado, resulta muy importante el puntualizar el hecho de que el conjunto de técnicas, mecanismos y procedimientos utilizados para manipular el medio ambiente, así como las necesidades e intereses varían según la sociedad y según el ensayo civilizatorio al cual pertenezcan. En otras palabras, diremos que la relación entre entorno y ser humano es muy diversa a lo largo y ancho del mundo en términos de formato y de sentido. Con lo cual podemos concluir que no existe una sola forma universal dada sobre qué tipo de medioambiente producir, sobre qué necesidades o intereses hay que satisfacer y sobre todo de qué medios utilizar para conseguir dichos fines.

Por esta razón existe un gran número de idiomas, dialectos y lenguas; cada una nos da cuenta de una relación en particular con el medio ambiente que está diferenciada de la otra. El espacio mismo se construye siguiendo el mismo parámetro: el lenguaje emplea todo lo que esté a su alcance para desarrollarse a sí mismo y para abordar dicha área que está a su alcance. Y lo evidenciamos al constatar que de un idioma a otro encontramos palabras que son “intraducibles” o aquellas que “faltan” o “sobran”. Este es un gran punto de enlace que nos ayuda a vislumbrar las condiciones de la relación entre una sociedad y la naturaleza, dado que

con el lenguaje logramos hacer un doble movimiento de aproximación: la percepción (sensibilidad) y la cognición (entendimiento).

Podemos tomar como ejemplo el caso de la modernidad en la cual tenemos una retórica muy particular sobre la naturaleza que está absolutamente ligada a las lógicas de procesos de acumulación y explotación para el capital. Esto significa que la forma cómo percibimos y entendemos a la naturaleza pasa por un ordenamiento previo que responde a intereses concretos, a una ideología y a un ensayo de sociedad definido por el acumulado histórico de necesidades y disputa política de intereses.

Un ordenamiento que incluye valoraciones y experiencias que no son propias de la naturaleza sino de nuestro sistema de representaciones que aterriza sobre la naturaleza. En otras palabras, hablamos de la producción social de la realidad y sobre la existencia permanente de un sesgo a la hora de relacionarnos con la naturaleza que de ninguna manera se expresa pura frente a nosotros por el simple hecho de que nuestras estructuras de percepción y cognición requieren de una fuerte huella ideológica.

“La naturaleza, también el marxismo, es predominantemente un objeto, el adversario del hombre en su “lucha con la naturaleza”, el campo para el desarrollo cada vez más racional de las fuerzas productivas. Pero, en esta forma, la naturaleza aparece como aquello que el capitalismo ha hecho de ella: materia, materias primas para la administración creciente y explotadora de los hombres y las cosas.” (Marcuse, pág. 73)

La frase más importante que podemos rescatar de la teoría de Marcuse es la clasificación de la expresión de la naturaleza como aquello que capitalistamente es creado. El hecho que la naturaleza *aparezca* ya con ciertos condicionantes como lo son las “fuerzas productivas”, “materias primas”, “explotación” y “cosa”; nos indica la existencia de un largo proceso de intercambio entre el ejercicio de la vida social y el flujo natural que esta sobre todo materializado en los cuerpos de los seres humanos que pertenecen a él. Estando nuestro lenguaje cotidiano absolutamente ajustado como demostramos anteriormente al enlistar términos (nombres) que aluden a un sentido específico de relación con la naturaleza.

“La naturaleza comercializada, la naturaleza contaminada y la naturaleza militarizada, todo ello interfiere en el modo de vida del hombre, no sólo en sentido

ecológico, sino asimismo en un sentido existencial; impide la cathexis (y la transformación) erótica de su alrededor: priva al hombre de encontrarse a sí mismo en la naturaleza, más allá y de este lado de la enajenación; también le impide reconocer a la naturaleza como un sujeto por su propio derecho, un sujeto con el cual vivir en común universo humano.” (Marcuse, pág. 71)

Ahora bien, no podemos pasar por alto el hecho de que cada configuración en la ecología de los seres humanos causa consecuencias en los mismos. La idea de que la sociedad moderna se construya en función del andamiaje de producción y acumulación de capital que podríamos simplificar en la lógica de la mercantilización absoluta (entendidos como procesos ideológicos) produce sujetos específicos que justamente definen de la misma manera su condición existencial (más aún si recordamos que el cuerpo es el primer “espacio del orden natural” que es disputado y lanzado al conflicto). El modo de vida del hombre estará reflejado en los términos con los cuales se aproxima a la naturaleza, cuando hablamos de asuntos ecológicos, en el fondo hablamos de nuestro modelo de vida propio.

1.4. LA DIMENSIÓN POLÍTICA, LA ESCENA DEL DESASTRE

Además de la ecología, tenemos muy ligado al campo de la política al cual lo vamos a definir como el espacio de la praxis o de la evocación al conflicto. La política nos habla sobre las objetivaciones de las disputas generadas sobre el sentido y el cúmulo de representaciones; es otro elemento constitutivo del ser humano que aterriza sobre las relaciones humanas que habilitan la producción de mundo (material y simbólico en dialéctica con el medio ambiente). Si nos preguntásemos ¿Cómo se explica la diversidad de relaciones con la naturaleza que las diferentes sociedades generan? La respuesta sería la política en la medida que da cuenta de la tensión entre seres humanos y la lucha por definir tanto los intereses como las necesidades (en definitiva, el proyecto de vida). Según el conflicto avance, las necesidades interés cambiarán junto con las formas de hacer praxis en el mundo.

En este punto llegamos al correlato en la dimensión de la política de aquello que definimos antes como la técnica o la capacidad de intervenir en el entorno. Lo cierto es que no podemos esquivar el hecho de que una técnica tiene como núcleo existencial el trabajo colectivo de los seres humanos. Y por lo tanto la ecología tiene como base fundamental las relaciones sociales que se tejen entre los humanos para garantizar la aplicación de la técnica. Tenemos dos

movimientos posibles que acompañan el trabajo colectivo y desde los cuales se construye la ecología: son la cooperación y la competencia. Ambas alternativas están presentes simultáneamente en cada técnica colectiva y su función principal es la de garantizar la supervivencia (entendida tanto en sentido universal de humanidad, así como también en sentido particular de ensayo civilizatorio).

La cooperación y la competencia son la materia política de la ecología puesto que están construidas por lo que desde Marx llamaríamos las *relaciones sociales de producción*. Las cuales sabemos que a nivel de formato son en gran medida una arbitrariedad que responde a lógicas de estructuración jerárquica de la sociedad o de su ordenamiento en rasgos amplios. Si nos referimos a trabajo colectivo, en otras palabras, nos referimos a ordenamiento, normatividad e integración social; es una acción que exige un mínimo común de acuerdo lo que incluye un mínimo común de disputa. Teniendo en cuenta que este ordenamiento tiene como producto principal no la técnica o los medios materiales o simbólicos de supervivencia sino a un ser humano “ordenado” (estructuras de percepción y de cognición). La política entra a debatir este ordenamiento sobre la técnica colectiva y la construcción de la sociedad, siendo el espacio donde se puede disputar aquel orden o donde se lo puede reafirmar.

Utilizando estas consideraciones podemos ampliar más la noción de ecología para vincularla directamente con la política: Tenemos pues la relación del ser humano con otro ser humano, la relación de ser humano con naturaleza, la relación de ser humano con sociedad y la relación de sociedad con naturaleza. Una forma rápida y certera de sintetizar esta vinculación entre ecología y política es analizar el tema de los recursos que entra en la lógica de los conflictos distributivos. La política determina en gran medida la forma en cómo se trata a los recursos, desde cómo y dónde se los obtiene hasta quienes reciben cuánto. La ecología está entremezclada en la construcción de la relación del ser humano y la naturaleza anclada en la dinámica de los recursos que define la experiencia sensorial y cognitiva.

“La confrontación de los problemas ecológicos exige elegir y tomar decisiones – qué producir, qué consumir, de qué tipo de energía depender–, lo que en última instancia tiene que ver con la forma de vida misma de la gente; en tanto tales, no sólo no son problemas técnicos, sino que son eminentemente políticos en el sentido radical de que demandan decisiones sociales fundamentales.” (Zizeck, 2011, pág. 52)

Con esto podemos realizar la siguiente afirmación: la forma cómo el ser humano desenvuelve su lugar en la ecología está políticamente determinada. La noción de *decisiones sociales fundamentales* representa aquel campo de disputa en el cual se juegan las decisiones que afectan la realidad social misma. Gira en torno a una especie de responsabilidad sobre nuestro propio lugar en la ecología; en otras palabras, pensamos al ser humano como a-localizado con respecto a la naturaleza, pero al mismo tiempo dependiente de ella.

Ahora bien, el momento actual de la modernidad abre con fuerza las discusiones ecológicas en los últimos tiempos debido a que se ha colocado gran parte de la responsabilidad sobre el ambiente natural en las actividades humanas y más aún sobre la producción o prevención de catástrofes naturales. La tecnología es vista como un factor de modificación extrema (muy acelerada en relación a los procesos vitales) del medio ambiente lo que supone una continua pelea de los seres humanos para mantenerlo adecuado para su supervivencia. Podría decirse que la configuración de la distribución de recursos en los últimos tiempos vuelve autodestructivas a las relaciones sociales de producción.

¿Cuáles son las respuestas o corrientes? El ecologismo ha tomado 3 formas según su papel en el escenario del conflicto político sobre la ecología humana en la actualidad nos dice Martínez: 1) Silvestre, 2) Eco-eficiencia, 3) De los pobres (Martínez, 2004). Cabe resaltar que cada uno de estos maneja una fuerte influencia teológica, son casi movimientos religiosos pero secularizados a nivel de los usos y costumbres. El ecologismo silvestre se basa en la pureza de la naturaleza, la mínima interferencia humana, la incorporación de “santuarios” naturales, etc... conteniendo a fin de cuentas la intención de reducir la población humana de forma arbitraria. La Eco-eficiencia coloca a la producción de riqueza más veloz y con menos repercusiones como la cumbre ideal a alcanzar, es el control absoluto de la naturaleza en términos de la aplicación científica; esta corriente puede ser explicada a través de Zizeck:

“La ciencia y la tecnología de hoy ya no buscan tan sólo entender y reproducir los procesos naturales, sino además generar nuevas formas de vida que nos sorprendan; la meta ya no es dominar la naturaleza (tal como es), sino generar algo nuevo, mayor, más fuerte que la naturaleza corriente, incluidos nosotros mismos: todos esos monstruos creados artificialmente, esas vacas y árboles deformes, o –un sueño más

positivo– esos organismos manipulados genéticamente, “mejorados”. (Zizeck, 2011, pág. 55)

Tanto el ecologismo silvestre como la eco-eficiencia supondría el fin de la naturaleza o esta “naturaleza 2.0” que justamente se presenta como impactante porque quiebra con la relación conflictiva entre ser humano y naturaleza creando algo más que no es ni lo uno ni lo otro. Esto es lo que “el fin de la naturaleza” quiere decir: la vida sintética no solamente complementa la vida natural, sino que convierte la vida natural misma en una especie de (confusa, imperfecta) vida sintética.” (Zizeck, 2011, pág. 56)

Y finalmente tenemos el ecologismo de los Pobres que una hace evocación a la relación ser humano y entorno dialécticamente construido en la cual el territorio o el ambiente responde al mundo simbólico y de representaciones. En otras palabras, hablamos de poblaciones que defienden la soberanía sobre su territorio para que este sea usado en los términos culturales y sociales que corresponden a sus habitantes:

“El eje principal de esta tercera corriente no es una reverencia sagrada a la naturaleza sino un interés material por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento; no tanto una preocupación por los derechos de las demás especies y generaciones futuras humanas sino por los humanos pobres de hoy.” (Martínez, 2004, pág. 27)

Es importante dar cuenta de la clasificación de las formas de ecología desde una perspectiva más cercana al análisis político y social debido a que se había establecido la importante relación que existe entre la ideología presente en la construcción del espacio urbano. Nos permite conceptualizar de mejor manera los mecanismos sociales que los habitantes de las zonas periféricas presentan para desarrollar su vida como comunidad inserta en la ciudad. Así, dichos habitantes manejan una estrategia concreta para contribuir al crecimiento urbano.

Siguiendo dicha línea de pensamiento, esto nos permite explicar de mejor manera el por qué los barrios periféricos se construyen en zonas de riesgos de desastre natural. Sobre todo, al enlazarlo con la distribución del espacio rural. En las zonas periféricas, las ciudades se construyen en un punto medio entre la plena urbanización y el campo. Los habitantes que ocupan dicho espacio utilizan una combinación de ambos condicionantes espaciales. Sobre

todo, en términos de convivencia social que utiliza muchas de las disposiciones comunitarias y de vecindad propias de las zonas más rurales (Jaramillo, 2014). Espacios en los que todos se conocen e interaccionan constantemente a nivel personal y doméstico, contrario a las formas más individuales que se asocian a las grandes urbes.

El uso del espacio que se considera de alto riesgo no mitigable, ya sea por deslaves, inundaciones, crecidas del río, entre otras, tiene su propio sistema de recursos que responde a la construcción de la ciudad. Su estilo de vida crea y adecua el espacio a su alrededor según la ideología que se maneja o simplemente los requerimientos para la reproducción de la vida material. En estas zonas se establece una relación muy particular con la naturaleza y la situación ecológica en general.

“La mayor parte de los programas de política social se elaboran directamente como intentos de mantener una distribución dada del ingreso dentro de un sistema social o de redistribución dada del ingreso entre los diversos grupos sociales que constituyen una sociedad. Por regla general, se suele aceptar que es necesaria una cierta redistribución, dado que, en una población, siempre hay gente que no pueden alcanzar un adecuado nivel de vida a través de los causes usuales.” (David, 1979, pág. 57)

Hay una constante geográfica que implica peligro, o por lo menos mayor peligro que el esperado para mantener la seguridad funcional al estilo de reproducción de la vida. En ciertos casos, los desastres naturales de magnitud media o aquellos no tan graves que suceden varias veces al año (como caída de escombros o crecidas de río) se convierten en parte cotidianos de sus habitantes y diseñan varias estrategias que les permiten superar cada contingente. Típicamente tenemos la presencia de trabajo comunitario para reparar las casas afectadas o para limpiar su zona.

No obstante, también existe la situación inversa producida por la unión de lo rural con lo urbano en las peores condiciones. En estos casos, la distribución del espacio que hace la comunidad es directamente perjudicial para las condiciones de riesgo. Desde el mismo hecho de construir en pendientes y provocar que el riesgo ya existente su magnifique. Así mismo, también es posible que la relación con la ecología sea aún más complicada, debido a que las zonas periféricas o con poco acceso a los recursos o servicios tradicionalmente urbanos tengan un mal manejo de desechos o de basura, sumando el riesgo de enfermedad.

Sea como sea, lo importante de esta reflexión es considerar que en los espacios que combinan lógicas rurales y urbanas se tiene una relación de tensión directa y constante con el medio ambiente. Todo está magnificado, inclusive los recursos naturales presentes en dichas zonas son los más abundantes en la ciudad. Grandes espacios y la capacidad de mantener una agricultura de consumo familiar; así como también la crianza de animales a baja escala.

El momento de ocurridos los procesos de reubicación, ya sea por migraciones a las zonas periféricas o por relocalizaciones organizadas por las administraciones públicas. Siempre tenemos el escenario una tensión y la necesidad de una adecuación de las prácticas sociales frente al nuevo uso del espacio. Pero, ¿Cómo explicar esta diferencia entre la distribución de los recursos de una ciudad? Lo que en otras palabras se referiría a buscar una manera de incorporar aquellos mecanismos de distribución que nacen de la necesidad y que se incorporan al modelo de construcción urbana.

“Al estudiar el problema de la distribución del ingreso queda de manifiesto que, en un complejo sistema urbano, los mecanismos ocultos de redistribución del ingreso normalmente aumentan las desigualdades en vez de reducirlas. Esto conlleva implicaciones inmediatas para la política social, en el sentido de que indica la necesidad de unas medidas de contragolpe en la redistribución directa si la dirección general de la redistribución oculta ha de ser contrarrestada.” (David, 1979, pág. 49)

Son justamente aquellos mecanismos ocultos de redistribución que nos ayudan a comprender el crecimiento irregular de las ciudades y también nos permitirá, más adelante, comprender las formas de inseguridad, la violencia y los negocios ilícitos que se van asociando a la distribución de recursos en los procesos de asentamiento en zonas de riesgo o reubicación.

Los mecanismos ocultos explican las condiciones de desigualdad que se configuran en las ciudades, y en particular en aquellas de América Latina y son tan fuertes y constantes que incluso llegan a manifestarse en intervenciones profundas por parte de la administración pública. En ese sentido, no podemos simplemente analizar el proceso de relocalización como la resolución de las problemáticas de crecimiento urbano sino como un modelo de distribución del espacio que puede contribuir o contrarrestar los mecanismos ocultos que acompañan la organización socio-económica de la ciudad.

CAPÍTULO II
PROCESO POLÍTICO Y SOCIAL DE REUBICACIÓN: “PROYECTO
HABITACIONAL LA MENA”

2.1 ANTECEDENTES GENERALES, UNA VISIÓN PANORÁMICA

Durante la historia reciente de la ciudad de Quito se han evidenciado importantes procesos migratorios que han dado forma a la configuración de espacios urbanos; tanto en el ámbito de ocupación del territorio como en las interacciones sociales contenidas en el mismo. Por esta razón es muy importante determinar las características más importantes de los movimientos migratorios para comprender cómo la ciudad se ha ido construyendo a lo largo de la historia reciente.

Uno de los antecedentes principales a analizar es la época de la bonanza petrolera, comúnmente llamada “boom petrolero” de los años 60 que marca el inicio del proceso de crecimiento urbano exponencial en las principales ciudades del país; caracterizado por haber incentivado una industrialización rudimentaria y el deterioro de las actividades económicas agrícolas de pequeña escala. De esta manera, las migraciones fueron de sentido campo-ciudad produciendo un importante cambio en la distribución poblacional a nivel nacional aumentando exponencialmente la cantidad de habitantes que las ciudades como Quito o Guayaquil recibían año a año (Zevallos, 1995).

El rápido ingreso de habitantes provenientes de zonas rurales, conjugado con la poca disponibilidad de espacio para la construcción o establecimiento de viviendas dio como resultado la creación de asentamientos irregulares, invasiones territoriales y la construcción de espacios urbanos sin planificación estructural. Adicionalmente, en el caso específico de la ciudad de Quito, este crecimiento provoca la ocupación de laderas, quebradas o zonas altas de la geografía de la ciudad de Quito. Y colocando el elemento socio-económico a la mezcla, la migración campo-ciudad produjo un proceso de empobrecimiento y muchas veces inclusive llegó a condiciones de miseria. Exhibiendo el panorama a manera general el resultado final es que los asentamientos irregulares y en zonas de riesgo coincidieron con las poblaciones más afectadas económicamente por el cambio que produce el “boom petrolero” a nivel nacional.

“A partir del proceso de industrialización por el petróleo, una importante migración campo-ciudad, especialmente hacia Quito y Guayaquil, provocando un proceso de urbanización de la pobreza. Aparecen entonces los primeros cinturones de

miseria, que en la ciudad capital se localizan principalmente en las laderas de las múltiples quebradas que cruzan”. (Jaramillo, 2014, pág. 10)

Un concepto valioso a resaltar de los previos estudios de antecedentes históricos que marcan el contexto de la situación actual es aquel denominado *urbanización de la pobreza*, que contiene la descripción de un proceso de urbanización de las condiciones de vida menos favorables. Para enlistar algunas tenemos: acceso limitado a energía eléctrica y agua potable, vialidad muy deficiente y por último la condición de riesgo inherente a las condiciones geográficas. No obstante, también podemos añadir una explicación más centrada en el proceso de transición de las formas de vida rurales y urbanas. Los cinturones de pobreza que rodean las ciudades más grandes corresponden a las poblaciones migrantes, suponiendo un cambio drástico en las formas de reproducción de la vida y en particular del uso del suelo.

Los barrios ubicados en las zonas de riesgo en la ciudad de Quito presentan una mixtura entre un espacio urbano y un espacio rural. Por un lado, su ocupación del espacio es la más amplia posible, la mayoría de los barrios en laderas o quebradas cuentan con actividades agrícolas de sustento básico y personal. No se manejan grandes extensiones de tierra, pero cada vivienda cuenta con su propio espacio para cultivar alimentos o criar animales. Sin mencionar el sentido comunitario que existe entre todas, especialmente evidenciado en las acciones de mantenimiento conjunto de *el* barrio en general que cubre en gran medida (o sustituye parcialmente) el acceso limitado a servicios básicos.

Por lo tanto, al hablar de los asentamientos irregulares en los cinturones de la ciudad, no solo podemos describir un proceso de urbanización de la pobreza sino también un proceso de ruralización del espacio urbano; o bien, de manera más precisa la transición de un modo de vida a otro adecuando una mixtura de usos del territorio. De cualquier forma, este antecedente se convierte en una problemática de varios tipos: política, social y económica.

En primera instancia, el contar con barrios como resultado de la migración a gran escala implica directamente retos complejos para la administración pública y por ende a la política de urbanización. De este ámbito podemos establecer tres ejes principales: Por un lado, el tipo de crecimiento de la ciudad, ensanchada irregularmente, iniciando con infraestructura rural y posteriormente cubierta por la infraestructura plenamente urbana. Luego tenemos el cálculo

de riesgo en las zonas susceptibles a catástrofes naturales (tales como los deslizamientos de tierra o inundaciones), que en un principio no habrían estado disponibles para la construcción. Y por otro lado la legalidad del uso del suelo y el reconocimiento de la legitimidad que las poblaciones adquieren sobre su espacio de vivienda.

De esta forma a lo largo de la última década han existido varios modelos de política pública que han formado parte en diversas intervenciones que poco a poco han dado la forma actual que tiene la ciudad de Quito. Empezando desde la expansión acelerada para el abastecimiento de servicios básicos, incluyéndose numerosas obras de adecuación infraestructural; hasta los más recientes programas de reubicación para poblaciones asentadas en zonas de alto riesgo o riesgo no mitigable. En un inicio, durante las décadas de los 60 y 70 se produjo una disputa por la apropiación de los espacios aledaños al casco urbano, sobre todo de las laderas y algunas quebradas.

Las administraciones públicas describieron políticas de indiferencia o por lo menos poca regulación, coincidiendo con el proceso de industrialización rudimentario y la multiplicación de cargos públicos junto con el mayor flujo de ingresos o actividades económicas vinculados a las actividades petroleras recién inauguradas. Posteriormente en las dos décadas siguientes se iniciaron las movilizaciones sociales provenientes de los barrios urbano-rurales que demandaban ser regularizadas por la administración pública, centrándose en el pedido de formar plenamente parte de la ciudad como tal; sobre todo en el sentido infraestructural.

Finalmente, las administraciones más recientes, desde hace una década cambiaron de forma sustancial el abordaje político de la problemática de los barrios irregulares y las poblaciones asentadas en zonas de riesgo. El nuevo enfoque entra en el contexto de la continuación del crecimiento exponencial de la ciudad, manteniéndose la alta tasa de migración al campo y la cada vez más numerosa población urbana en detrimento de la cantidad de población rural. Así, añade mucho más peso al factor político del riesgo, con sus implicaciones particulares.

“Dentro de este contexto, en política de gestión de riesgos, a nivel nacional se establece una estructura con categoría de Secretaría de Estado para atender los desastres, prevenir riesgos a través de la reducción de vulnerabilidades y procurar la

recuperación pos-desastre. A nivel local, se fortalece la estructura existente y se aprueba el Plan de Relocalización de familias en alto riesgo no mitigable del DMQ.” (Jaramillo, 2014, pág. 10)

Las acciones administrativas se van a encargar en un primer momento de levantar grandes cantidades de información; para luego clasificar las zonas irregulares según un nivel de riesgo según la probabilidad de enfrentar un desastre natural (deslizamientos o inundaciones). Posteriormente se inició con los programas de reubicación que buscaban otorgar oportunidades y acceso para nuevos espacios de vivienda en zonas planificadas como conjuntos habitacionales prediseñados. Conjugado con la disposición política de no permitir más el uso de territorio con alto riesgo o riesgo no mitigable.

Otro factor no mencionado anteriormente pero muy valiosos para entender el enfoque de las administraciones públicas más recientes es el despliegue de acciones, ordenanzas y programas de corte ecológico que se articulan junto con los procesos de reubicación y mantenimiento de las quebradas. Siendo una de las características más particulares el esfuerzo realizado para conseguir consciencia ecológica de los habitantes reubicados o que viven en zonas urbano-rurales. Caso muy significativo el del programa habitacional de la Mena y la limpieza de las laderas aledañas. Es decir, podemos establecer que para explicar de mejor manera el proceso de reubicación es vital tener en cuenta la ecología política de los años más recientes.

Para cerrar el panorama general de los antecedentes, por último, abriremos la temática a tratar, así como el enfoque histórico que se utilizará para abordar el proceso del programa habitacional la Mena. Es importante recalcar una vez más que el proceso actual estudiado sobre las políticas de reasentamiento y las lógicas del uso social del espacio producto de las mismas no se puede comprender en su totalidad sin tener en cuenta su proceso histórico que ha sido sintetizado. La idea es abordar la reubicación de los diversos barrios en zona de riesgo hacia el conjunto habitacional de la Mena teniendo en cuenta sus continuidades con el proceso de crecimiento de la ciudad a partir del “boom petrolero”.

2.2 CONTEXTO ESPECÍFICO, POLÍTICO, ECONÓMICO Y SOCIAL

Desde 1900 hasta 1988 en el Distrito Metropolitano se presentaron 163 inundaciones, 36 hundimientos de calzadas, 114 deslizamientos y 70 aluviones con graves impactos en pérdidas humanas y materiales (Moreno, 1996, pág. 106). Según EMAAP-Q en el periodo entre 1990 y mayo de 1995 se registraron 60 daños en el sistema de alcantarillado de Quito, que ocasionaron diversos tipos de pérdidas y afectaciones a los ciudadanos, a la empresa y a la ciudad en general. Entre estos se produjeron 4 taponamientos de las captaciones con represamientos y desbordes a la ciudad, 16 roturas de colectores, 4 hundimientos de calzadas y 39 inundaciones de los barrios de la ciudad (Zevallos, 1995). Este pequeño recuento histórico del contexto topológico de la ciudad nos da una idea clara sobre la frecuencia y proliferación de zonas de riesgo que el espectro urbano constantemente enfrenta. Agravándose entre más exponencial sea el crecimiento de la ciudad y la mayor tendencia a ocupar los espacios de laderas y quebradas para uso de vivienda.

En los años recientes los deslizamientos, hundimientos e inundaciones continuaron sucediendo en la ciudad. Destacándose las catástrofes ocurridas en el año 2011, no solo por su magnitud sino por la cantidad de ellas que sucedieron en el corto periodo de 5 meses. Estos eventos de desastre actúan como detonante de las acciones políticas a tomarse después en cuanto a acelerar los procesos de reubicación y evacuación de zonas de riesgo. Tornándose urgente atender la condición de numerosas personas damnificadas y muchas más con altas probabilidades de serlo también. El punto clave aquí es tomar en cuenta que las vertiginosidades de los eventos naturales pusieron en marcha toda una movilización de recursos políticos, sociales y económicos para atender las problemáticas de la geografía urbana en la ciudad de Quito.

Siguiendo el mismo evento, a consecuencia del duro invierno, caracterizado por fuertes lluvias, en los cinco primeros meses del 2011 se produjeron 119 movimientos de masa y 94 inundaciones; con lo cual se malograron numerosas viviendas; 899 personas fueron afectadas y varias personas murieron. Se identificaron alrededor de 600 familias que debían ser

relocalizadas inmediatamente para salvaguardar su vida (Secretaría de Seguridad Ciudadana, MDMQ, 2011).

Como variable de intersección a los desastres naturales tenemos a la ocupación desordenada de laderas. Históricamente, a partir de la década de los años 70 la ciudad de Quito inicia un proceso de ocupación irregular y disperso. Un proceso urbano directamente relacionada con el impulso económico que reciben las grandes ciudades por la inauguración de la explotación petrolera que incide directamente en el sector de la construcción.

Sin olvidar el precedente de la Ley de Reforma Agraria de 1964 que provoca la acelerada lotización de las antiguas haciendas que rodeaban la ciudad. Ambos, crecimiento económico exponencial y Ley de Reforma Agraria, producen un proceso de expansión demográfica e infraestructural tan acelerada que logra saltar las regulaciones de la ciudad. Originando que el Municipio pierda el control sobre la expansión urbana (Barreto, 1994).

“A mediados de los años sesenta se consolida en el país un modelo de acumulación alternativo que intentó alterar la estructura de poder de los terratenientes serranos, por medio de la reforma agraria; y de la oligarquía agro exportadora costeña a través de las políticas de industrialización: un modelo capitalista de desarrollo con participación directa del Estado.” (Jaramillo, 2014)

Finalizando con el periodo de reorganización del territorio de los años 60, vendrán una serie de políticas estatales vinculadas a los gobiernos militares conjugados con la inclusión del petróleo como potenciador de los ingresos del país. No obstante, el excesivo gasto corriente de los gobiernos militares produjo un déficit fiscal que pretendió ser superado con la disminución notable en la inversión pública.

Traduciéndose en mayor desatención a las poblaciones que había formado los cinturones de miseria en las ciudades; sin mencionar que agudiza los flujos migratorios campo-ciudad articulados a la nueva concentración de capital en dichos lugares. Y cerrando el panorama está el endeudamiento externo público y privado de fácil acceso, lo que se considera una de las razones para la crisis de fin de siglo (Uquillas, 2009). (Entre 1998 y 1999 seguidos por los procesos de devaluación de la moneda y la dolarización).

Cabe mencionar también que el escenario de la crisis de la deuda externa que tuvo lugar en los años 80 fue un potenciador de la ocupación ilegal y desordenada de las laderas. Los casos de invasiones eran muy comunes y típicamente se ligaban a movilizaciones políticas operadas por partidos políticos o hasta por los propios concejales de la ciudad. Durante esta década, las ocupaciones irregulares recaían en su mayoría en los bosques de propiedad estatal de carácter protegido que bordeaban el espectro urbano.

Pero no será hasta los años noventa que la problemática tome su forma más crítica. Se registraba en las laderas de la ciudad un crecimiento urbano de 17.5% anual (Moreno, 1996); lo cual iba acompañada por una serie de obras de infraestructura complementaria a las viviendas: caminos, rellenos, desbroces, entre otros. La característica más importante de esta etapa de la creación de asentamientos en las laderas, es que la gran mayoría de la construcción era de tipo auto-gestionado. Aquel afán de enganchar áreas de vivienda a la ciudad en conjunto a sus habitantes era implacable. Sin dejar de lado que durante esta década y la que vendría después cohabitaban procesos de ocupación de laderas tanto legales como ilegales, es decir, reconocidos e ignorados por la administración pública.

A nivel latinoamericano se verifican resultados similares: el número de pobres en áreas urbanas se duplicó entre 1980 y 1990, y el crecimiento del número de indigentes tuvo un comportamiento análogo. Esto demuestra una marcada marginalización urbana reflejada en la ocupación espontánea u organizada de terrenos públicos y privados (Coraggio, José Luis; Ziccardi y Bodemer, 1999).

La siguiente coyuntura que marcaría los procesos de urbanización sería el periodo de inestabilidad política y convulsiones sociales de finales de la década de los 90s (con continuas y plurales movilizaciones sociales que marcaban el final de un gobierno tras otro). En 1999 la pobreza alcanzó el 61.1% a nivel nacional y la pobreza extrema el 26.2%.

La desigualdad social, (representada por el coeficiente de Gini) aumentó de 0.48 en los años 70, a 0.50 en los 80 y 0.52 a lo largo de la década de los 90s. Convirtiéndose, según el Banco Mundial, en el tercer país en inequidad en la región. Por otro lado, en cuanto a los niveles de pobreza vinculados al acceso a recursos por parte de la población, el quintil más

pobre descendió del 4.6% en 1990 al 1,7% en el 2004, mostrando una notable agudización de la desigualdad social dado que al mismo tiempo que el acceso a la riqueza del quintil poblacional más alto subió de 52% al 62.35. (Larrea C, 2009).

Dichos indicadores de desigualdad también podían ser evidenciados en la territorialidad de las principales ciudades del país. Consolidándose las zonas urbanas marginales como espacios más cercanos a la ruralidad y opuestas a los procesos de modernización (en el sentido desarrollista del término). Y al mismo tiempo, iniciando procesos de urbanización con características opuestas siendo zonas con la infraestructura urbana más reciente y un crecimiento al apreciamiento del uso del suelo. Con lo que se implica que entre las condiciones socio-económicas nacionales se volvía cada vez más complicadas, las ciudades principales crecen de manera más acelerada y sobre todo irregular. Siguiendo las lógicas de cómo se mueve el capital y se va acumulando de forma desigual en los espacios urbanos más grandes.

Frente a las condiciones de un acelerado crecimiento urbano en las laderas que se articula a un emprendimiento y una voluntad muy fuerte de ejecutar ocupaciones auto-gestionadas; sólo queda una conclusión posible: El uso del suelo de las laderas, así como la apropiación de su territorialidad dejan de ser un mero acto demográfico o infraestructural. Es imposible hablar sobre una ampliación o reproducción del espectro urbano en términos exclusivamente topológicos, geográficos, ambientales o de ingeniería; es vital resaltar el componente social y político marca el sentido de una ocupación, de la edificación de un asentamiento poblacional.

Las laderas constituyen uno de los espacios en disputa y en proceso de conquista más críticos de la ciudad (Zevallos, 1995). Entiéndase conquista en su más amplio sentido de la palabra, como un acto de tomar o ganar algo vía intervención, mucho esfuerzo. Lo cual se complejiza al introducir el componente de la dominación y de la acción de arrebatar que en este caso envuelven a la acción de conquista.

Notablemente, ya en los años 2000 la tendencia de crear asentamientos en las laderas empezó a decrecer paralelamente a una mayor preocupación sobre esta área por parte de la administración pública la cual empezó a ejecutar proyectos de protección del uso de las laderas, al mismo tiempo que iniciaron programas de prevención de las ocupaciones irregulares. Sin

embargo, en este punto de inicio la acción municipal era poco contundente y requería de una incorporación de mayores y más diversas esferas de acción como por ejemplo la gestión de riesgo en las laderas o la práctica ingenieril, sin mencionar el despliegue político y social requerido para este tipo de emprendimiento.

Ya en el año 2009, la estructura del Estado frente a cómo se administra la territorialidad cambia al crearse nuevas instancias y cambiando el enfoque mismo de las problemáticas. Así se crea la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con el objetivo de permitir al Estado administrar todo aquello que se relaciona con la respuesta a situaciones de riesgo, así como su prevención. Esto muestra una clara organización de las funciones del Estado desde sus aparatos institucionales, consiguiendo un fuerte protagonismo y la incorporación del componente del riesgo como postura política e ideológica. Este sería el primer paso desde la política pública que da un antecedente directo y concreto para iniciar los programas de reubicación.

Es imprescindible señalar que la política del riesgo debe ser leída más como una decisión política, separada de la vulnerabilidad, sino como un cálculo de probabilidades administrativas, que por su puesto llevan detrás una gama de disposiciones entrelazadas con la forma de vida de las sociedades. Dicho cálculo es sin duda el centro mismo de las problemáticas de la relocalización puesto que para el proyecto habitacional La Mena, era necesario que toda persona que formara parte del mismo, accediera a los bonos económicos y se le asignara una nueva vivienda, debía residir en una localidad calificada con riesgo no mitigable.

Como previo al análisis, podemos orientar la lectura de este punto en los antecedentes, estableciendo que la territorialidad de los procesos sociales va de la mano con los procesos políticos; es más, son un mismo proceso correlacionado. Tenemos un cambio estructural en las instituciones del Estado, junto con un enfoque ideológico orientado a la gestión del riesgo. Dando como resultado la consecuente reorganización del suelo, tanto con los flujos económicos como los usos sociales del espacio. Por lo tanto, este preámbulo de cómo se construye la ciudad marca un importante determinante para comprender los procesos actuales.

A finales de los años 2010 la Alcaldía Metropolitana de Quito iniciaría una aproximación radical a la problemática de los asentamientos en laderas y demás zonas de riesgo. El contexto general es la aprobación de la nueva Constitución 2008 desde la cual se empiezan a elaborar ordenanzas municipales que tengan por objetivo establecer la exclusividad del uso suelo del Distrito Metropolitano de Quito para el desarrollo de vivienda de interés social; la reubicación emergente de asentamientos ubicados en áreas de riesgo no mitigable y primera vivienda, infraestructura educativa y equipamiento comunitario.

Respondiendo a todo este cordón de circunstancias, entra en cuestión el fenómeno concreto que se investigará: El programa habitacional La Mena ubicada al Sur del Distrito Metropolitano de Quito que se consolida como el más grande proyecto de reubicación poblacional como respuesta a la gran cantidad de personas ubicadas en laderas de alto riesgo; quienes fueron afectadas o estaban en peligro de serlo por las lluvias. En total, el programa habitacional habilitó 408 unidades familiares con lo cual cientos de personas fueron reubicadas desde diferentes barrios del Distrito Metropolitano de Quito hacia La Mena.

Los trabajos de urbanización y construcción tuvieron una duración de 10 meses, lo cual lo vuelve una de las respuestas más rápidas frente a una emergencia de vivienda en Quito. La inversión total del proyecto es de 7'387.309 dólares que se aplican para la construcción de viviendas, obras comunales y de infraestructura. Sin olvidar que el programa no solamente incluye la apertura de hábitat y vivienda, sino que también incluye planes para desarrollar iniciativas económicas solidarias que potencien la capacidad financiera de los nuevos ocupantes de las viviendas. La concepción de la reubicación fue diseñada con una visión integral y corresponsable en la que se busca fundir la actividad del Municipio de Quito, el gobierno central y de la comunidad de desplazados o damnificados.

Las unidades familiares son entregadas a los nuevos ocupantes mediante la facilitación de crédito para la vivienda; mismo que debe ser pagado en forma complementaria entre el aporte particular de los usuarios, la Secretaría Nacional de Riesgos junto con el MIDUVI (Bono de reasentamiento 9.200 dólares), la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad del Municipio

(Bono de vulnerabilidad 1.450 dólares). Todo articulado con el siguiente esquema de financiación:

- Crédito de entidades del Sistema de Finanzas Populares
- Recursos propios
- Recursos provenientes de indemnización recibida por expropiación de predio anterior por parte del Municipio.

Las familias cancelan el crédito de acuerdo a su capacidad de pago, que puede ser un plazo de hasta 8 años con un pago de 60 mensuales para los departamentos y 108 dólares en el caso de las casas. Al momento, se registra que más de la mitad de familias ubicadas en La Mena han registrado su pago a un plazo de 3 a 4 años.

- Los barrios de donde provienen las familias beneficiadas son:
- Administración Zonal Eloy Alfaro: Barrio La Forestal, San Bartolo, Quiteño Libre, Chahuarquingo y Chilibulo.
- Administración Zonal Quitumbe: Cumbres de Chillogallo y San Francisco de la Chorrera.
- Administración Zonal Manuela Sáenz: San Luis de Monjas, San José de Monjas, Línea Férrea, Auqui de Monjas, Arellano Portilla, Vista Alegre, Guápulo, La Colmena, San Diego, Paluco, Yacu, La Libertad, El Placer, San Roque, San Francisco de Miravalle, Vicentina Baja, San Juan, San Blas, La Ronda.

2.3 LA MENA COMO PROCESO, PRIMEROS ACERCAMIENTOS AL ESCENARIO

La mecánica básica que llevó a cabo el programa habitacional está hecha enteramente por la administración pública; representa los engranes y correas de transmisión de fondo que abren en el escenario la posibilidad de generar un desplazamiento poblacional, una reubicación y la creación de una ciudadela urbana casi completamente artificial en el sentido de ser diseñada en su totalidad mediante la institucionalidad estatal. No obstante, cabe señalar que también entran en el proceso entidades financieras privadas que también darán forma al proceso. Sobre todo,

en lo que tiene que ver con el financiamiento correspondiente a cada una de las familias desplazadas para poder acceder a su nueva vivienda.

Así, desde finales de septiembre de 2011 hasta julio del 2012 se realizó el trabajo de sondeo y ubicación de todas las viviendas en riesgo no mitigable. Inmediatamente después el desplazamiento fue iniciado, en un primer momento con la relocalización temporal de las familias damnificadas en viviendas de arriendo cuya renta sería parcialmente cubierta por el Municipio. De esta manera podemos establecer diferentes condiciones de vulnerabilidad de los habitantes de las zonas de riesgo no mitigable y de las personas que experimentaron el detonante del deslizamiento de tierra. La vulnerabilidad geográfica del lugar de vida es solo el componente más urgente o visible a simple vista.

En realidad, tenemos que contar con los factores alternativos socio-económicos de las poblaciones desplazadas y el cambio drástico de las formas de utilizar el espacio. Teniendo en cuenta las lógicas agrarias de interacción social, actividad económica y relación con el suelo; la relocalización implica un reto muy complicado. Podemos plantear que el mismo proceso de transición de un lugar a otro (ya sea por la fuerza de los desastres naturales o por las ordenanzas englobadas por las políticas públicas encaminadas a mitigar el uso de zonas de riesgo) implica una situación de vulnerabilidad en sí misma.

Aclarando que aquella vulnerabilidad intrínseca a la relocalización radica en la transición de un modo de vida a otro; una vez culminado la relocalización, la situación cambia sustancialmente. Sobre todo, porque las condiciones territoriales se convierten radicalmente en un entorno infraestructuralmente urbano. Eliminando las formas de vulnerabilidad geográfica (refiriéndose al componente más cercano a las características del suelo como tal), pero añadiéndose otras formas de vulnerabilidad más relacionadas con la interacción social entre los habitantes, incluyendo: Delincuencia, tráfico de drogas e inclusive la convivencia vecinal como tal.

De estas puntualizaciones lo más valioso a resaltar es la permanencia del continuo cambio entre diferentes escenarios y el fuerte vínculo que se va estableciendo entre el espacio, la

política y las interacciones sociales; en síntesis, la construcción y reproducción social del territorio. Tema que será desarrollado más a fondo posteriormente.

Retomando el inicio de las acciones de relocalización, una vez aprobadas y emitidas las resoluciones y ordenanzas del Distrito Metropolitano de Quito el siguiente paso sería la puntualización de qué viviendas serán entregadas y a quién. Para el proceso de asignación de las viviendas se definió una metodología y se conformó un comité con la participación de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad, las Administraciones Zonales Manuela Espejo, Quitumbe y Eloy Alfaro, y la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (EPMHV). Dicha metodología consistía en un proceso de calificación y de eliminación que buscaba seleccionar a las familias más adecuadas y que empaten con el proyecto de La Mena.

Paralelamente se realizaban todos los trabajos de diseño y de tramitación de los bonos que incluía gestión de financiamiento y accesibilidad a créditos. Se dieron lugar las obras de construcción tanto del complejo como tal y de los barrios aledaños que fueron equipados con nueva infraestructura urbanística y también comunitaria. Al cual también se le suma la ejecución de 10 mingas para recuperar la quebrada contigua al conjunto habitacional La Mena.

Culminó el proceso de diseño de la propuesta urbanística de la siguiente manera: priorización del área verde de uso comunitario y la accesibilidad peatonal a todo el conjunto (55% del espacio); habilitación de las proyecciones hacia arriba de las viviendas (hasta 3 pisos); la priorización del desplazamiento peatonal a lo largo y ancho de todo el conjunto; y el reconocimiento de la construcción de la parte intangible que abarcan las relaciones interpersonales características de un vecindario.

Finalmente se estructuró las alternativas de reproducción económica para el conjunto habitacionales, en una suerte de motor financiero a baja escala organizado por la administración pública. Como preámbulo, la economía es solidaria y se ha esquematizado en cuatro áreas estratégicas: textiles, servicios de construcción, servicios comunitarios y comedor comunitario. Paralelamente se contó con la organización de comisiones encargadas de gestionar las mingas y el trabajo comunitario (Jaramillo, 2014).

En la actualidad, el proyecto de reubicación y el programa de vivienda La Mena está alcanzando su fase final, con la inmensa mayoría de viviendas siendo utilizadas por los antiguos moradores de los barrios de diferentes zonas de riesgo por deslizamiento de la ciudad. Las acciones desde la administración pública, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realizan controles de las condiciones de vida (incluyendo la forma de convivencia), el cumplimiento de los contratos y acuerdos, la finalización del pago y por último el haber completado los requisitos legales (todo lo que tiene que ver con trámites y documentos indispensables para avanzar en las diferentes fases, desde la evaluación de riesgo, pasando por el reasentamiento y la adquisición de la nueva vivienda).

Paralelamente, se toman acciones en conjunto con las asambleas comunitarias y los líderes barriales de La Mena para identificar y responder necesidades o problemáticas que han sido producto del proceso de reubicación. Estas acciones tienen un sentido de evaluación para las instancias administrativas puesto que La Mena es el primer proyecto que abarca todas las disposiciones de la reciente política pública para afrontar el uso del espacio y el riesgo. Y por lo tanto, representa el proceso de vanguardia de esta temática, ofreciendo información muy valiosa para el resto de nuevos proyectos que actualmente están en marcha. En otras palabras, el proyecto habitacional La Mena constituye una suerte de ejemplo y proceso de aprendizaje para conseguir cumplir con la política pública establecida.

Una vez descrito el proceso general de cómo se ha desarrollado el proyecto habitacional La Mena, y teniendo en cuenta su trasfondo histórico junto con su contexto coyuntural, es momento de realizar una lectura más minuciosa. Para esto se procederá a dividir en tres ejes de estudio la amplitud de los procesos de: levantamiento de información, selección de beneficiarios, financiamiento, abandono de las antiguas viviendas / ocupación de las nuevas y despliegue de las lógicas de convivencia actuales.

Así, el primer eje son las ordenanzas ministeriales, municipales y en general las lógicas de las políticas estatales y gubernamentales frente a la reubicación. El segundo eje es un acercamiento directo a la vivencia de las personas que forman parte del conjunto habitacional La Mena, en particular su percepción sobre el proceso de reubicación; la lógica de su

territorialidad antes y después (todo lo que tiene que ver con las interacciones sociales tanto entre población relocalizada como entre personal administrativo de las instituciones gubernamentales). Y el tercer eje es la perspectiva del personal administrativo y cómo vivenciaron el proyecto, en este punto se podrán establecer las formas de acercamiento que tiene un grupo de actores con el otro; en una suerte de punto de encuentro entre la realidad social más concreta y las configuraciones políticas de la administración pública.

2.4. ACERCAMIENTO A LA TERRITORIALIDAD, un estudio desde tres ejes

2.4.1. ORDENANZAS Y POLÍTICA PÚBLICAS, la disposición estatal y la plataforma ideológica de la reubicación

Entre los requisitos establecidos por la Ordenanza Municipal 0331 encontramos lo siguiente: Encontrarse en situación de pobreza; o bien que uno de sus jefes de familia sea un adulto mayor, o que la familia tenga como jefe un hombre solo o mujer sola; o esté integrada por una persona con discapacidad. También se establece que ninguno de los miembros de la familia se propietario o que tenga derechos sobre un inmueble comercial situado en el territorio nacional. Que expresamente haya manifestado su decisión de incorporarse en el proceso de Relocalización de Familias Damnificadas o en Alto Riesgo no Mitigable.

Por otro lado, también se determinan variables económico-sociales para acceder a las acciones municipales, por ejemplo: Que el avalúo de su propiedad o posesión no supere el valor de una vivienda básica de interés social, determinado por la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda (empresa encargada de la construcción, avalúo y entrega de las viviendas del conjunto habitacional de la Mena).

Las familias cuyo ingreso conjunto no alcance para cubrir el valor de la canasta básica familiar mensual, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador, se considerarán familias en situación de pobreza. Siguiendo la misma línea, las familias la calificación de las condiciones de la familia, se realizarán a través del informe de evaluación socio-económico emitido por parte de la administración zonal correspondiente.

Así, una vez definidas las zonas de riesgo, la Autoridad Municipal Responsable dispondrá a la Administración Zonal correspondiente la notificación a las familias cuyos predios hayan sido calificados como de alto riesgo no mitigable o que hayan perdido su vivienda como consecuencia de fenómenos naturales, sobre la desocupación inmediata de sus viviendas. Iniciando así el proceso de desalojo voluntario en algunos casos y en otros involuntario. Puesto que las zonas más proclives a los desastres naturales de tipo deslizamiento fueron evacuados previamente de realizarse esta medición.

Una vez recibida la notificación, la familia calificada como idónea deberá suscribir un Acta de Compromiso con el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que contendrá las obligaciones detalladas de la siguiente manera:

Para el jefe o jefa de familia está determinado en primer lugar como parte de sus compromisos la aceptación para desocupar el inmueble e incorporarse en el proceso de relocalización; y, en el caso de ser propietario o posesionario legalmente reconocido, de forma inmediata, transferirá la propiedad del inmueble o cederá el derecho de posición del mismo, al Municipio de Distrito Metropolitano de Quito.

La aceptación para la contribución de las gestiones necesarias para su traslado definitivo y la obligación de endosar a la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda los Bonos previstos por ordenanza municipal 0331.

En cambio, las obligaciones del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito incluyen: Que se entregue al jefe o jefa de familia el valor mensual de doscientos dólares como ayuda humanitaria por un periodo de tres meses. Tiempo destinado a que las familias realicen las gestiones pertinentes para su reubicación definitiva; periodo de reubicación que podrá ampliarse hasta seis meses en caso de demora en el trámite de adquisición de la vivienda (que como se verá posteriormente es el escenario más común para el conjunto habitacional La Mana).

El Municipio (MDMQ) también aportará el valor equivalente al avalúo municipal de su inmueble en propiedad o posesión para la adquisición de la nueva vivienda y ofertará a través

de la Empresa de Hábitat y Vivienda (EPMHV) alternativas habitacionales, técnicamente seguras y económicamente sostenibles.

A través de la firma de un convenio marco entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, la SNGR y el MDMQ, se establece la entrega de 404 bonos de relocalización, que serían gestionados por la EPMHV. La Secretaría General de Seguridad a su vez gestionó la entrega de los bonos de vulnerabilidad a la EPMHV. Algunos beneficiarios que recibieron ayuda humanitaria y no necesitaron arrendar viviendas y ocuparon el dinero recibido para completar el saldo a pagar.

La EMPHV se encargó de gestionar los créditos hipotecarios y de consumo para los beneficiarios. Una vez aprobado el crédito o la cancelación del saldo con fondos propios del beneficiario, se procede a la elaboración y firma del Acta de Entrega-Recepción de la vivienda y se entrega las llaves de la misma. Los propietarios de vivienda en riesgo, cuyo trámite de pago del avalúo para la vivienda se encuentra pendiente por parte del MDMQ, reciben las llaves, previa la certificación de la Secretaría de Seguridad del avalúo aprobado para el bien en cuestión.

Si bien no se determinó un nivel de coordinación oficial entre las instancias municipales a cargo de la relocalización, el Comité de Adjudicaciones del Proyecto La Mena, conformado con el ánimo de establecer conjuntamente una manera más objetiva de adjudicar las viviendas, se convirtió al poco tiempo de su conformación, en un espacio de comunicación permanente entre la Dirección Metropolitana de Gestión de Riesgos, las Administraciones Zonales Centro, Eloy Alfaro, Quitumbe y la EPMHV, que permitió el flujo de la información y la coordinación de las actividades de cada una de éstas, de manera individual y colectiva, logrando respuestas ágiles a varios imprevistos que surgían en esta primera experiencia de esta magnitud. Las primeras familias iniciaron su asentamiento en el Conjunto Habitacional La Mena en abril del 2012, pero la mayoría recibieron sus viviendas entre mayo y julio del mismo año. Al momento se encuentran viviendo en el barrio 370 familias y está pendiente la entrega del 10% de las viviendas, debido principalmente a la dificultad de acceso al crédito de este grupo de

beneficiarios. En enero del 2013 se inició el proceso de escrituración que se espera culmine en junio del mismo año.

Ahora bien, ya se ha descrito las condiciones de ordenanza y más o menos un panorama general de la política pública orientada a la gestión del riesgo y a la cara más social del proceso, evidenciándose el enfoque Municipal y estatal sobre la definición misma de condiciones de pobreza y el abordaje técnico destinado a solventarla. Pero aún queda un componente fundamental para comprender la política pública y es la organización de las finanzas, los pagos y la economía en general que actúa como una especie de motor o por lo menos de facilitador para darle forma a todo el proceso de relocalización y de ocupación de las nuevas viviendas. Teniendo esto en consideración, se señalan los siguientes puntos dispuestos en la Ordenanza Municipal 0331 sobre cómo se financiará el pago de las nuevas viviendas a través de incentivos estatales:

El “Bono de Emergencia” y el “Bono para vivienda urbana nueva” dirigido a las familias damnificadas, otorgado por el Gobierno Central, a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. El “Bono de Vulnerabilidad” otorgado por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Entre otras disposiciones sobre el financiamiento tenemos que el Municipio entregará el valor de las viviendas en posición de las familias calificadas para el plan de reubicación según lo estipule la Dirección Metropolitana de Catastro que actualizará el avalúo hasta la fecha en que se requiera para iniciar el proceso de reubicación.

Existen algunas puntualizaciones particulares para el “Bono de Vulnerabilidad”, entre ellas las más importantes a destacar son: Es entregado una sola vez y solo a aquellas familias que acrediten ser residentes del predio que ha sido calificado de alto riesgo no mitigable o arrendatarios del mismo por más de dos años. Este bono de vulnerabilidad le permitirá a la familia contar con el requisito básico de ahorro previo exigido por el MIDUVI para acceder al sistema de incentivos para la Vivienda. Este bono está cuantificado en el 10 por ciento del valor de una vivienda básica de interés sociales determinado por la Empresa Pública de Hábitat y Vivienda.

El saldo del precio de la alternativa habitacional a la que se trasladará la familia, será financiado por la propia familia. En el caso de que el valor acumulado de los rubros anteriores fuera superior al precio de la alternativa de vivienda elegida, el Municipio entregará al jefe o jefa de familia el valor del saldo correspondiente.

Una vez que la familia damnificada cuente con el financiamiento total del precio de la alternativa habitacional a la que se trasladará, se suscribirá la respectiva escritura pública de compra venta del inmueble; pasando así al dominio del jefe o jefa de familia.

EL inmueble ubicado en la zona de alto riesgo no mitigable y transferido a favor del Municipio será declarado como bien de uso público. Los beneficiarios del proceso de Relocalización de Familias de Alto Riesgo No Mitigable que hayan accedido a la nueva vivienda, no podrán venderla ni arrendarla antes de cinco años contados a partir de la entrega del inmueble.

Finalmente, la Ordenanza Municipal 0331 plantea cómo se realizará la recuperación de las zonas afectadas o de alto riesgo no mitigable una vez que se hayan transferido las posesiones sobre viviendas de las familias relocalizadas, se procederá a cambiar el uso del suelo. El derrocamiento de las edificaciones, la limpieza de los predios y el acondicionamiento ambiental del sitio recuperado, ejerciendo control del uso y ocupación de dicho suelo clasificado como de riesgo no mitigable por peligro de deslizamientos de tierra, hundimientos o inundaciones.

2.4.2. CONVIVENCIA Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA, el proceso de relocalización desde el punto de vista de los habitantes.

Las entrevistas y aproximaciones iniciales con los habitantes comenzaron con el recuento de su experiencia desde que vivían en los barrios de zona de riesgo no mitigable. Pasando por el inicio del proyecto posterior al evento del desastre y finalmente en la adquisición de sus nuevas viviendas y el inicio de su vida en el nuevo barrio del conjunto habitacional “La Mena”.

En primer lugar, se manifestó las condiciones en las que se vivía en las zonas de riesgo, resaltando el valor de la vida en comunidad y la seguridad humana que todos se proveían unos

a otros. También se puntualizaron diversos trabajos que realizaban a favor el espacio donde vivía, encargándose de hacer mingas para construir caminos, tuberías, conexiones eléctricas y también de manejo de desechos. Mencionaron que no tenían alcantarillado ni agua potable, pero que se organizaban para ayudarse entre todos.

Uno de los puntos más recordados sobre esta primera parte del proceso era la estructura de convivencia cotidiana entre los vecinos que, guardando las situaciones particulares, era satisfactoria. La seguridad también era un punto sobre el que se insistió mucho debido a que en la actualidad enfrentan varios problemas con la delincuencia y la violencia interna al conjunto habitacional.

En segundo lugar, durante la fase de tramitación de la nueva vivienda y la relocalización forzada que implicaba el arriendo temporal de otra vivienda. Sobre este asunto se manifestaron diferentes quejas al respecto. Evidenciando el funcionamiento práctico de las ordenanzas y la política pública que enfrentaba varios contratiempos como la ubicación de las viviendas en arriendo que desacomodaba las organizaciones previas de las familias al moverse en la ciudad.

Después, se evidenció la dificultad y la angustia vivida durante la fase de recolección de información y de tramitación de las nuevas casas, así como también de los diferentes talleres informativos que se realizaron. En este punto en particular se puede apreciar cómo se estructuraba la relación entre los habitantes y las diferentes instancias públicas que los atendía. Manifestando un cierto grado de malestar producto de la dificultad en la comunicación.

Por último, los habitantes entrevistados declararon que después de 3 años de vivir en el conjunto, las cosas han cambiado bastante y que actualmente enfrentan problemas serios de convivencia y de tolerancia entre vecino. Con el agravante de que ha habido amenazas entre habitantes y dificultad para recurrir a los servicios de seguridad pública. Por esta razón paródicamente la administración metropolitana realiza intervenciones de tipo social y cultural para garantizar la buena convivencia.

CAPÍTULO III

ANÁLISIS: REUBICACIÓN, MOVILIDAD Y CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO
SOCIAL

3.1. EFECTO ECOLÓGICO

El proyecto de la mena opera como si el riesgo fundamental que se posiciona como justificativo de la relocalización hubiese ocurrido. El desastre natural los estuviese desplazando y fueran refugiados ambientales. El municipio se encargaría de canalizar ese desplazamiento en lo que a primera vista sería una política de vivienda como lo estipula tanto las ordenanzas municipales como la constitución 2008. No obstante, existe un pequeño punto ciego: la “emergencia” lo que nos sugiere que estamos frente a un contingente, a una intervención nacida desde la contingencia. Por su puesto esta clase de requieren muchísima labor burocrática, científica, política, comunitaria además de representar gastos económicos; por lo cual no son procesos demasiado violentos.

Tampoco hablamos de limpieza social en el sentido estricto de la palabra puesto que tenemos. Ahora bien, si consideramos que esta es una medida de prevención y no de emergencia: Es de emergencia desde el punto de vista ambiental y de salvaguardar la vida. No obstante, es de prevención socio-económica; a propósito de un desplazamiento ambiental, se crea un re asentamiento desde la política, desde la administración pública, lo cual es una forma de intervenir en el territorio y el proceso urbano marcando una determinada forma de concebir la urbanidad de aquellos sectores que representan una población desarraigada con un previo territorio irregular y de alto riesgo o sin ningún espacio propio. Para transformar a un espacio fijo.

Lo cierto es que el caso de la Mena es un excelente ejemplo de desplazamiento ambiental; es decir, tenemos un gran grupo de personas cuya forma de vida entro en una absoluta catástrofe provocada por las “fuerzas de la naturaleza” que en este caso representan los deslizamientos de tierra. Hablamos de la destrucción total del mundo y para entenderlo mejor resulta muy útil imaginar un escenario de ruina de las formas de vida y el espacio social como tal, como si más allá del deslizamiento de tierra no existiera nada.

No estamos frente a un accidente o a la pérdida de hogares sin más ni más; basta con imaginar la percepción subjetiva que conlleva el hecho que el suelo propio, el suelo conquistado y el espacio donde se territorializan las formas de vida súbitamente se convierta

en una cascada, en un río. Imaginemos el impacto subjetivo de ver cómo aquello que era sólido y sostenía el hogar se convirtió en líquido, incapaz de sostener nada. Parte de este ejercicio es no considerar ninguna metáfora como metáfora sino como realidad absolutamente concreta; por lo cual al decir que lo sólido se convirtió en líquido, nos referimos al orden de lo concreto de lo abstracto que supone la simbolización de sostener sujetar la vida misma.

Como ya habíamos explicado, este acontecimiento no está aislado en el tiempo y responde a un contexto histórico puntual. Hablamos de 10 barrios aproximadamente, significativamente separados el uno del otro que se ubican hasta hoy en día en zonas propensas a los deslizamientos de tierra. Pero ¿Por qué armar una casa en aquel suelo que aunque aparenta firmeza, en realidad es liquidez? Según la historia presentada en el capítulo anterior podemos encontrar una constante, un nombre que se repite constantemente ya sea en los periodos de poco control como en los de exhaustivo control.

El personaje del que estamos hablando es la administración pública que en los últimos 50 años (hasta antes de la alcaldía del Augusto Barrera). Por lo cual confirmamos inmediatamente nuestra concepción sobre desastre natural que se convierte en desastre social. El hecho aislado es presentado como un fenómeno de la ecología y los damnificados son tipificados como refugiados ambientales, pero en realidad es un efecto de la construcción de la ciudad de Quito desde la Administración Pública con todos los intereses particulares que defiende. Es muy curioso ver cómo de traficantes de tierra particulares se transita hacia un gran traficante de tierras institucional, impersonal que es la administración pública.

La distribución de tierra en la ciudad da cuenta de un sin número de conflictos sociales y disputas sobre los recursos. No hay que explorar demasiado para establecer que la tierra es el medio de producción más básico y sobre el cual se asienta la disputa por la apropiación singular del mismo. El Estado traficante y los traficantes particulares dan cuenta de este hecho ya que la tierra entra en la lógica de la propiedad privada aunque esta sea una necesidad absolutamente básica para la supervivencia. La estrategia era parcelar las tierras de las laderas y entregarla a poblaciones que buscan asentarse en la ciudad de Quito.

“Empezaremos por la proposición de que la circulación del capital realiza su valor mientras la labor vivo cree valor. La circulación tiene dos aspectos, el momento concreto y físico del

desplazamiento entre el punto de producción y el punto de consumo y el momento que implica los costos adheridos a tiempo que tarda este desplazamiento a través de todos los intermediadores sociales” (Harvey, 2001, pág. 222)

El conflicto que precede al evento del proyecto habitacional de la Mena tiene como base fundamental el *boom* petrolero de los años 70 bajo el cual el sector de la construcción creció exponencialmente al punto de remodelar o “modernizar” (en el sentido de infraestructura) casi por completo a la ciudad de Quito. Los barrios que estaban ubicados en las zonas de riesgo no mitigable son herederos que aquel proceso económico y concuerda con fuertes migraciones del campo hacia la ciudad que por sí mismo representa un cambio fundamental en los proyectos de vida. El componente ideológico es quizás el más fuerte ya que este sostiene y sostuvo el proyecto de modernización en su sentido infraestructural que es movilizado por todas aquellas personas que arman se adhieren al movimiento de crecimiento de la construcción.

3.2. CAPITAL Y TERRITORIO

Varios son los implicados en este conflicto, y aquellos damnificados que hoy en día se están instalando en un conjunto habitacional equipado con la mejor tecnología de infraestructura arquitectónica son sólo la punta o una de los fragmentos de todo el proceso. Lo cierto es que la Alcaldía actual se alinea en una situación muy parecida al *boom* petrolero de los años 70 con un crecimiento imponente del sector de la construcción. En otras palabras, la creación del conjunto habitacional es uno de los tantos de la potenciación macro-económica; y las personas que son reubicadas bajo una fuerte acción burocrática son los nuevos sujetos de este movimiento.

La construcción en mediana altura, en formato de conjunto habitacional modifica las relaciones socio-económicas implicadas en la construcción. Nos referimos pues a que la elaboración de los departamentos densificados requiere necesariamente una fuerte inversión de capital de construcción; simultáneamente a la participación de los capitales financieros bancarios como facilitadores de la actividad constructora. No obstante, cabe abrir la pregunta sobre si en el caso de la Mena se evidencia una fusión del capital de construcción con el financiero o un trabajo homogéneo y coordinado expresado como capital inmobiliario de

aquellos sectores. Tentativamente estableceríamos que ambos capitales participaron, pero no como un solo sector sino manteniendo las fronteras de su acción independiente.

Al construir un nuevo espacio la lógica de los sujetos cambia radicalmente, en sentido estricto es como una migración desde la periferia absoluta de la ciudad hacia una zona más céntrica de la misma. Pero en esta ocasión también tenemos la presencia fuerte de la administración pública esta vez con los intereses particulares claramente visibilizados en el contexto del crecimiento económico y de construcción de ciudadanos.

En este caso no hay un tráfico de tierras, en su lugar tenemos una distribución de viviendas o paquetes habitacionales; el suelo entendido en su dimensión más concreta lleno de polvo, hierbas, rocas es reemplazado por los hogares, por los servicios que se pueden sintetizar en “pases” o “cupos” para el acceso a la vivienda. Parcelas de tierra ya no es la lógica sino oportunidades que son comercializadas en la Empresa de Hábitat y Vivienda del Municipio de Quito.

“En cada uno de estos requisitos [1) la existencia del plusvalor del trabajo, 2) la existencia en el mercado de obtener medios de producción, 3) la existencia de un mercado que absorba las crecientes cantidades de comodidades producidas] el proceso de acumulación podría encontrar una barrera definitiva la cual, una vez alcanzada, fácilmente podría precipitar una crisis de alguna clase. Dado que, en las economías capitalistas plenamente desarrolladas, el sustento de la fuerza laboral, el sustento de los medios de producción y de la infraestructura necesaria, y finalmente la estructura de la demanda son todos producidos bajo el modelo de producción capitalista, Marx concluye que el capitalismo tiende activamente a producir varias de las barreras para su propio desarrollo. Lo que significa que las crisis son endémicas para el proceso de acumulación de capital.” (Harvey, 2001, pág. 239).

Vemos pues que al analizar la cantidad de papeleo y los incontables requerimientos que se deben presentar a la Empresa de Hábitat y Vivienda el impacto subjetivo principal es el hecho de dejar el mundo entero de los damnificados en manos de los funcionarios públicos. El mundo del proyecto de vida es “capturado” o por lo menos alejado de quienes lo van a ejecutar; la relación con el medio ambiente pasa a ser aquella que el Estado en general manifiesta. Es a esto a lo que nos referimos al categorizar este fenómeno como el tráfico de cupos u oportunidades de vivienda. Solo basta con constatar que no todos los damnificados y no todas las zonas de riesgo han sido incluidas en este plan habitacional o en algún otro.

La construcción refleja sobre todo el capital inmobiliario que hoy en día se maneja vía créditos que justamente es la estrategia tomada por el proyecto habitacional de la mena; puesto que las viviendas no son de ninguna manera gratis, están encargadas al sector privado de la construcción bajo la intermediación de los bancos y el capital financiero.

En este punto, debemos considerar los factores de inversión económica como verdaderos centros de gravedad que influencia sobre el proceso de organización territorial. Al hacer la investigación, encontramos que el manejo de los bonos y de los créditos suponía una fuerte barrera para determinar qué personas lograban completar el proceso de reubicación; aún en la fase final del proyecto cuando se realizaban los controles de pago o cumplimiento de contratos de financiamiento, representaba el criterio fundamental para la evaluación del uso de las viviendas.

Resulta muy útil considerar en el análisis la intervención de distintas instituciones financieras como cooperativas de ahorro o mutualistas que adquirieron un protagonismo para la ordenación de las viviendas. Siendo que parte del financiamiento debía ser realizado de forma particular por cada familia relocalizada, estas instituciones de préstamo tenían las características ideales para conseguir el dinero necesario.

No obstante, también se reportaron algunas dificultades con las tasas de interés o las condiciones solicitadas para obtener los créditos, agregándose una relación implícita entre el proyecto habitacional y el capital circulante. Contrastando y oponiendo nuevamente lo público con lo privado en la misma experiencia particular de las personas reubicadas.

En ese sentido, evidenciamos que, al elaborar el plan de reubicación y la construcción de un proyecto habitacional, se está hablando del movimiento continuo de las lógicas del capital. Se lo puede pensar como una especie de atractor urbano, de la forma que se explicó anteriormente, el territorio está determinado por las acciones sociales que interactúan entre sí y con el medio. La presencia de los créditos privados y de los bonos públicos para conseguir la reubicación determina una forma específica de incidir en la territorialidad de la ciudad.

La pregunta que debemos hacernos es ¿Qué implicaciones tiene esa configuración de construcción del espacio público? Bajo este cuestionamiento se logra armar una interpretación

y un análisis que se enfoque en explicar el fenómeno desde su complejidad social, más allá de los determinantes ambientales o las manifestaciones geográficas. El proyecto habitacional movilizó una cantidad grande de recursos humanos y materiales. Está planteado como una reforma integral al crecimiento de la ciudad y por lo tanto va más allá de construir nuevas viviendas. Implica un intencionado trabajo de negociación, elección de condiciones y de manejo de poblaciones.

Se desplegaron grandes contingentes de tramitación pública, asesoría económica, diseño y construcción arquitectónica. En ese sentido, el proyecto habitacional es una exposición del capital circulando y siendo aplicado directamente sobre el territorio. Pero, ¿Qué lugar ocupa dentro de la organización urbana? En un primer acercamiento podemos ver que es un gran atractor de recursos y una forma de aumentar de forma rápida la densidad poblacional en la zona del barrio de La Mena, lo que se corrobora con la incidencia para crear empleos, negocios y demás actividades comerciales alrededor (inclusive actividad ilícita relacionada con la venta de psicoactivos o de violencia organizada).

Con el caso de La Mena, es muy interesante reflexionar el cambio que se produce entre los entornos rurales-urbanos hacia los entornos pensados para ser completamente urbanos. La ciudad como tal representa la acumulación de recursos y la oportunidad de establecer relaciones sociales apoyadas en la individualidad y la división específica de roles/funciones del trabajo. El establecer un programad de reubicación de las zonas urbano-rurales (o marginales si cabe el término) representa la iniciativa desde la administración pública de atraer la población hacia y podría implicar la desestructuración del campo y las lógicas de la ruralidad.

Por esta razón, La Mena es presentada para sus habitantes y el público en general como emblema de la modernización de la ciudad, sobre todo en su esfera de ordenamiento del suelo determinado por Estado o la administración municipal local. Es más, La Mena es el primero de los proyectos de reubicación que se desplegarán y que se siguen desplegando hasta la actualidad (exactamente es el segundo en aplicarse con el motivo de suspender el crecimiento urbano en zonas de riesgo, pero es el primero con las características de integrar a la ciudad un

grupo masivo de personas junto con un acompañamiento para asistir en sus interacciones sociales).

Podemos decir que es el punto de partida que explica la forma actual de concebir el espacio urbano y en general a la población territorializada en él. No se trata simplemente de reducir el riesgo en la ciudad, se trata de imaginarla y concebirla con unas características muy puntuales desde lo financiero y desde la concepción de administración pública. Innegablemente, La Mena representa la oportunidad de crecimiento económico, por lo menos en el sentido de inversión.

Es un cambio de vida brusco para muchos habitantes que se entrega como una posibilidad de esperanza al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida. También se lo piensa como una estrategia para acelerar el flujo de recursos económicos en la ciudad, después de todo significa colocar decenas de familias en un espacio de la décima parte que antes ocupaba; al tiempo de reunirlos en una zona singular al contrario de su disgregación general anterior.

“Cualquier reducción en el tiempo de circulación incrementa la producción de plusvalor y mejora al proceso de acumulación. Acelerando la velocidad de la circulación de capital, se contribuiría al proceso de acumulación. Bajo estas condiciones “aun las distancias espaciales se reducen así mismas frente al tiempo: lo más importante no es las distancias que maneja el mercado en el espacio, sino es la velocidad. . . con la cual el mercado es alcanzado.” (Harvey, 2001, pág. 244)

Vemos entonces como el La Mena está lejos de significar meramente una respuesta a un problema ecológico o de mitigación de riesgo, es en realidad un espacio perfecto para la creación y acumulación del plus-valor. Así, se tiene que pensar el proceso de reubicación como el manejo de las interacciones sociales que están intrínsecas en las ordenanzas y disposiciones que establece el Estado.

En otras palabras, el Estado no está regulando exactamente el espacio como tal sino la forma cómo las personas interactuamos entre nosotros. Es una ordenación simbólica en primer lugar, cosa que podemos evidenciar con mucha sencillez en el hecho de que se declara qué tipo de terreno sirve para la construcción y cual no. El etiquetarlo de esa manera no es un llamado geográfico sino político con todas las implicaciones que trae sobre las personas.

3.3. CONVIVENCIA E INTERACCIONES SOCIALES

El proceso de La Mena resulta muy significativo para entender la creación de la interacción social desde el punto de vista del uso del espacio. Es excelente para apreciar la forma cómo la ciudad de Quito está caracterizada por un crecimiento exponencial de su población en una suerte de intercambio entre la ciudad y el campo. La población de La Mena enfrenta los retos y problemas de esta característica pero actualizados a la nueva concepción de la ciudad utilizando percepciones modernas como la mitigación y prevención del riesgo. Sin mencionar la forma como se etiquetan los espacios para normar el intercambio social, cultural y económico.

Revisando lo obtenido en las entrevistas realizadas a la población de La Mena, encontramos que su proceso de reubicación implicó para ellos un cambio de realidad y de mundo radical. No solo por el hecho de abandonar lo que era su espacio de vivienda original y creado con su propio trabajo (recordemos que las casas de los barrios en zona de riesgo estaban construidas por los mismos habitantes de allí); sino por el integrarse a nuevas reglas y normas que habían sido ajenas y que muestran la realidad del espacio urbano.

En primer lugar está la relación con el personal de la administración pública con quienes debían constantemente intercambiar trámites e información. En este punto podemos ver como el Estado se manifiesta en forma de los funcionarios para acercarse y regular a la población relocalizada. Es muy importante considerar que la mayoría de los trámites resultaron para los habitantes como un proceso irracional y sin demasiado fundamento (muchos comunicaron inclusive una suerte de maltrato o mala atención intencional). Al comparar las entrevistas entre ambos grupos, podemos evidenciar una especie de conflicto intrínseco o por lo menos una disputa o un choque entre facciones.

El conseguir los documentos necesarios para legalizar o legitimar el uso y adquisición de las nuevas viviendas se convirtió en un proceso cotidiano, repetidamente acercarse a las oficinas del Municipio para completar todos los requisitos y viceversa, el Municipio haciendo intervenciones en La Mena para recolectar los documentos necesarios. Este intercambio muy

particular define el espacio urbano de La Mena desde la aproximación pública. Es más, al realizar los recorridos e intervenciones, los funcionario del Municipio no solo se encargan de dichos documentos sino que también se realizan encuestas, entrevistas o resolución de conflicto para normar o asistir en el intercambio cotidiano entre los vecinos.

Se desplegaron algunos planes programas para el garantizar un buen ambiente entre los pobladores. Incluyendo iniciativas de reciclaje, trabajo comunitario, seguridad colectiva y resolución de conflictos de convivencia. La presencia del Estado y las ordenanzas en el caso de La Mena es constante y empieza a definir cada una de las estrategias del uso social del espacio. No obstante, pese a que todos los programas en su conjunto pueden entenderse como una especie de educación ciudadana a toda la comunidad de La Mena; más allá de esa capacitación lo que tenemos es un espacio de la ciudad cuya convivencia está monitoreada a fondo e intervenida constantemente.

Aun así, no se debe confundir la presencia de las políticas públicas con el éxito automático de las mismas. La mayoría representa una reacción para solucionar un problema previo que se desencadena dentro de la misma lógica de vida dentro del conjunto habitacional. Por ejemplo, las peleas entre vecinos, la violencia intrafamiliar, robos, asaltos y tráfico de drogas se fueron exagerando con el tiempo una vez terminada la relocalización. Resulta muy importante poner atención a estos procesos que son la puesta en escena de dicho conflicto mencionado anteriormente: Campo-Ciudad o lo Público-Privado.

Hay varios malestares que se mantienen dentro del conjunto habitacional y también hay mucho reconocimiento a las mejoras en la calidad de vida. De esta forma es mucho más fructífero poner atención a qué es exactamente esa calidad de vida que experimentan los habitantes. Así, uno de los principales motivos manifestados sobre el malestar es el tipo de convivencia que se presenta puertas adentro del conjunto. Por un lado tenemos personas que vivían en un entorno rural caracterizado sobre todo por la convivencia al estilo comunitario y alejado del estilo individual urbano. Al momento que esta población inicia un nuevo escenario de reproducción de la vida cotidiana que rompe con la mayoría de las estructuras que sostenía

el acercamiento al uso social del suelo, pues entonces sienten malestar relacionado con ese cambio.

Las principales problemáticas no giran en torno a grandes procesos económicos o políticos sino al estado de las relaciones entre vecinos. La forma cómo la población se aproxima a las dificultades es pensando que las personas asociadas a dichas dificultades no están respetando la interacción en comunidad. No definen el problema del tráfico de drogas desde la violencia como tal sino como esa violencia lastima las relaciones interpersonales entre vecinos y convierte al ambiente de vivienda en un ambiente desagradable.

Se puede decir que estamos frente a un proceso que nos ayuda a comprender que la forma como la ciudad de Quito crece no implica una urbanización del cambio sino una ruralización de la ciudad. Pero en este punto no cabe determinar cuál es la más indicada, lo que es importante definir es la intervención de la política pública en este sentido. Es la cuestión de cómo agenciar el conflicto que yace en la interacción y cómo las problemáticas más complejas en los programas de reubicación giran en torno a qué tipo de ciudad se construiría a partir de la incorporación constante de formas de vida codificadas al espacio rural y comunitario.

CONCLUSIONES

La investigación se enfoca en el caso del proyecto habitacional “La Mena” de la ciudad de Quito que inicia como parte de una respuesta desde la administración pública de la ciudad a la situación de inminente riesgo que presentaban los habitantes de zonas de riesgo de deslave en los sectores periféricos de la ciudad.

Se analiza entonces el proceso de relocalización y de ocupación del nuevo barrio junto con todas sus implicaciones sociales, económicas y políticas. A grandes rasgos, los resultados que se construyen al término del proceso de investigación giran en torno a cómo el movimiento de capitales desde el sector público genera una configuración en el territorio basada en la constante interacción entre habitantes y administración pública. También un manejo sobre el riesgo y la ecología desde el punto de vista del crecimiento urbano que se materializa en relaciones interpersonales concretas entre los habitantes que pasan de un estilo de vida orientado a un espacio semi-urbano a un espacio urbanizado por completo y con constante intervención y supervisión de la política pública.

Evidenciando el proceso de urbanización no solo en la geografía como tal sino en las lógicas de convivencia y uso de dicha geografía por parte de sus habitantes. Así, encontramos que las dificultades operativas: de acceso a recursos, el tener un espacio libre de riesgo, bienestar material fueron relativamente superadas al tiempo de generar nuevas problemáticas en cuanto a: convivencia entre vecinos, relación ecológica con el medio ambiente y seguridad frente a riesgos urbanos como robos o tráfico de drogas.

Resultando en una situación única en que, luego de cuatro años de iniciado el proceso, se encuentran toda clase de manifestaciones de esta relación de tensión entre la política pública y la vida social o cotidiana de los habitantes de este barrio en específico. Realzando lo complejo que resulta en la práctica el llevar a cabo los procesos de urbanización, entendiendo como una organización del espacio que conlleva la adecuación de las lógicas de interacción social. Siendo un proceso adaptación constante para los habitantes de La Mena y de superación de una serie de dificultades.

Bibliografía

- Barreto, R. (1994). *Manejo Ambiental y Prevención de Desastres Naturales con participación Comunitaria: el caso de los barrios populares del noroccidente de Quito*. Costa Rica: LA RED.
- Carrión, F. (2001). *Urbanismo en América Latina*. Quito: FLACSO for Junta de Andalucía.
- Castels, B. J. (1998). *Local y Global*. Ed. Taurus: Madrid.
- David, H. (1979). *Urbanismo y desigualdad social*. Mexico: Siglo Veintiuno Editores.
- Hardoy, J. E. (1980). *Las ciudades en América Latina, serie de ensayos sobre la urbanización contemporánea*. Buenos Aires: PAIDOS.
- Harvey, D. (2001). *Spaces of Capital, towards a Critical Geography*. New York: Routledge.
- Jaramillo, A. (2014). *DESARROLLO, RELOCALIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD*. Quito: FLACSO.
- Marcuse, H. (s.f.). *Contrarrevolución y revuelta*.
- Martínez, J. (2004). *El ecologismo de los pobres, conflictos ambientales y lenguajes de valoración*. Barcelona: Icaria Antrazyt FLACSO.
- Moreno, O. Z. (1996). *Ocupación de Laderas e incremento del riesgo de desastres en el Distrito Metropolitano de Quito*. Lima: Naciones Unidas Estrategia Internacional para la reducción de desastres.
- Sassen, S. (2007). *Una Sociología de la Globalización*. Buenos Aires: Editorial Katz.
- Zevallos, O. (1995). *Estudios hidrológicos complementarios y áreas de afectación por flujos de lodo y escombros*. Proyecto protección de las laderas de pichincha BID/EMAAP-Q.
- Zizeck, S. (2011). *Bienvenidos a tiempos interesantes*. La paz.

ANEXOS

ANEXO 1

Ordenanza Metropolitana 0077: RELOCALIZACIÓN

Ordenanza Metropolitana 0331: RELOCALIZACIÓN DE FAMILIAS DE ALTO RIESGO NO MITIGABLE

Ordenanza Metropolitana 0396: FAMILIAS DAMNIFICADAS

ANEXO 2

Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

GUIA PARA FORMULAR Y EJECUTAR PLANES DE
RELOCALIZACION DE FAMILIAS EN CONDICION DE RIESGO NO
MITIGABLE

ABRIL 2010

FORMULACION Y EJECUCION DE PLANES DE RELOCALIZACION DE FAMILIAS
OBJETIVOS

- Alentar la desocupación de áreas en riesgo para precautelar la vida de las familias ubicadas en sectores críticos identificados en los mapas de amenazas del Distrito Metropolitano de Quito.
- Garantizar a las familias, soluciones socialmente justas y adecuadas al perfil socioeconómico y cultural de cada una, de manera que se demuestre un cambio positivo en la calidad de vida de las personas reasentadas.
- Recuperar los espacios liberados incorporándolos como espacios públicos no construibles del DMQ.

DIRECTRICES Y PREMISAS BÁSICAS PARA LA FORMULACION DEL PLAN

- La formulación y aplicación del Plan, debe tener en cuenta acciones para mitigar el impacto social de las familias desplazadas, garantizando su participación en la implementación del mismo.
- Tomar las medidas necesarias para minimizar situaciones relacionadas con el fraccionamiento de las redes sociales (familiares y comunitarias). Implica también fortalecer las opciones culturales para grupos o familias indígenas que se encuentren entre la población a reubicar; y, ii) generar espacios de calidad ambiental en las zonas recuperadas y la apropiación social de los mismos, de manera que no vuelvan a ser ocupados.

- Garantizar pluralidad en las alternativas de soluciones. Las características y situaciones
- particulares de cada grupo familiar son bastante diversas en el conjunto de la población objeto de la relocalización, con lo que, cuanto mayor sea el abanico de alternativas de solución disponible, más adecuado socialmente será el plan de intervención.
- Posibilitar un proceso de consulta y de participación social para la población directamente involucrada en el proyecto, de manera que las familias acepten formalmente las medidas de reasentamiento y de compensación, al tiempo que se garantice el reconocimiento de sus derechos consuetudinarios, si existieren. El Plan de Relocalización debe considerar la participación como una herramienta eficaz de gestión y planificación.
- Garantizar en el antes, durante y después de la relocalización, un trabajo con las familias, considerando las particularidades en las acciones sociales, técnicas y legales. Para situaciones de emergencia, debe considerar lugares de residencia temporal y los costos de manutención por el tiempo que sea necesario (asignación de monto mensual para cubrir por lo menos los costos de vivienda, transporte y servicios básicos), mientras se realiza la reubicación definitiva.

ANEXO 3

PLAN PARA EJECUTAR EL TRASLADO DE LAS FAMILIAS

PRETRASLADO

Técnico – normativo:

- Definición del marco legal municipal para ejecutar la relocalización de familias
- Definición de alternativas de vivienda:
- Proyectos de vivienda municipales
- Otras opciones de vivienda
- Costos
- Financiamiento
- Bono de la vivienda
- Planificación de actividades de control de los espacios liberados
- Planificación de proyectos de acondicionamiento ambiental para los espacios liberados.

Sociales:

- Talleres de sensibilización.
- Reuniones individuales con cada familia o grupales, de negociación y establecimiento de acuerdos.
- Definición de alternativa de solución de vivienda
- Suscripción de actas de aceptación
- Plan de reinserción laboral y de apoyo social a personas vulnerables.
- Capacitación a las familias en convivencia comunitaria en el marco de la propiedad horizontal.

Legales:

- Levantamiento de expedientes legales de cada familia
- _ Garantizar la libre elección de las soluciones habitacionales por parte de las familias, dentro de las opciones ofertadas por el MDMQ.
- _ Garantizar la inserción de la población afectada en los programas de apoyo social que cuenta el Municipio de Quito.

FORMULACION Y EJECUCION DEL PLAN**Para cumplir con el objetivo se deben cumplir las siguientes actividades:**

- Determinación de procedimientos legales a seguir según casos de familias propietarias y posesionarias.
- Implementación de los procedimientos legales: expropiación y transferencia de dominio (propietarios), prescripción adquisitiva de dominio (posesionarios); reconocimiento del valor de la construcción en terrenos públicos y privados.

TRASLADO**Sociales:**

- Talleres de organización del traslado.
- Ejecución del traslado de vivienda, entrega llaves
- Talleres de inducción al uso y cuidado de las nuevas instalaciones de vivienda.

Legales:

- Proceso de escrituración de las nuevas viviendas.

POST TRASLADO**Sociales**

- Talleres sobre la vida en comunidad y en casos de familias relocalizadas en condominio sobre cumplimiento de la Ley de Propiedad Horizontal.
- Visitas mensuales a cada familia para monitoreo de adaptación e identificación de impactos.
- Inclusión en programas municipales de apoyo social, en los casos en que sea necesario.
- Trabajo de sensibilización con la población que habita en los sitios receptores.
- Trabajo con familias que viven en sitios cercanos a la relocalización orientados al cuidado de los espacios liberados.

Técnico:

- Recuperación de lotes liberados: derrocamientos, cercado y señalización.
- Ejecución de acciones de cuidado y control de los espacios liberados, para evitar futuras invasiones.
- Ejecución de obras de acondicionamiento ambiental en los espacios liberados.